

donación CEPAL
24 abril 2006

Aprender de la experiencia: el capital social en la superación de la pobreza

FLACSO - Biblioteca

Aprender de la experiencia

El capital social en la superación de la pobreza

Irma Arriagada

Editora

FLACSO . Biblioteca



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Comisión Económica para
América Latina y el Caribe



COOPERAZIONE
ITALIANA

Santiago de Chile, septiembre del 2005

La publicación de este libro se enmarca en las actividades del proyecto "Capital social y reducción de la pobreza: uso potencial de nuevos instrumentos de política social" llevado a cabo por la División de Desarrollo Social de la CEPAL, con el auspicio del Gobierno de Italia. Se agradecen los comentarios proporcionados por el lector externo Sr. Guillermo Sunkel a los borradores preliminares de los textos que componen este libro.

BIBLIOTECA - FLACSO - E C	
Fecha:	24 Abril 2006
Categoría:	
Proveedor:	
Código:	13757
Denominación:	CEPAL

REG.	15374
IMP.	13253
IMP.	2006

362.5
A68a
ej. 2

Diseño de portada: Andrés Hannach

Publicación de las Naciones Unidas

ISBN: 92-1-322717-5

LC/G.2275-P

Nº de venta: S.05.II.G.93

Copyright © Naciones Unidas, septiembre del 2005. Todos los derechos reservados

Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N.Y. 10017, Estados Unidos. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción.

Índice

Resumen	11
Abstract	13
Introducción	15
Primera parte	
Aproximaciones conceptuales sobre capital social y los programas para la superación de la pobreza	19
Capítulo I	
Estrategias de vida y estrategias de intervención: el capital social y los programas de superación de la pobreza	
<i>Anthony Bebbington</i>	21
Introducción	21
A. Bases conceptuales	23
1. Estrategias de vida, activos y capital social.....	23
2. Estrategias de vida e intervenciones para la superación de la pobreza	26
3. Capital social y estrategias para la superación de la pobreza.....	27
4. Programas de superación de la pobreza como formas de capital social.....	30
B. Lecciones de los programas analizados	32
1. Las estrategias de vida y la superación de la pobreza....	32
2. El capital social y la superación de la pobreza	33
3. Los programas de superación de la pobreza como capital social: culturas de intervención y la (de)formación del capital social comunitario	35

C. El capital social y los programas de superación de la pobreza: conclusiones e implicancias.....	37
1. El capital social como concepto para los programas de superación de la pobreza.....	37
2. Los tipos de capital social y la superación de la pobreza	38
3. Análisis ex ante y utilidad conceptual	39
4. El principio de cautela.....	40
5. El capital social y el sector público.....	40
6. Los silencios del capital social.....	42
Bibliografía	44

Capítulo II

Superación de la pobreza, capital social y clientelismos locales

<i>John Durston</i>	47
A. ¿Qué se entiende por “programas de superación de la pobreza”?	47
B. ¿Qué se entiende por capital social?	48
C. ¿Es el clientelismo una forma de capital social?	52
D. ¿Por qué privilegiar referencias en el nivel municipal?	54
E. ¿Qué funciona?	55
F. Conclusiones.....	56
Bibliografía	57

Segunda parte

Las experiencias.....	59
-----------------------	----

Capítulo III

México: Oportunidades y capital social

<i>Mercedes González de la Rocha</i>	61
Introducción	61
A. Del minimalismo a la nueva política social	65
B. Oportunidades para los pobres.....	70
C. Reciprocidad, intercambio y capital social	75
D. Oportunidades y capital social.....	81
1. Nuevas identidades: las mujeres “Progresas”	83
2. Rupturas y conflictos.....	84
3. Permanencia del intercambio social.....	86
4. Aislamiento social.....	88
E. Conclusiones.....	89
Bibliografía	92

Capítulo IV

Programas de superación de la pobreza y el capital social. Evidencias y aprendizajes de la experiencia en Chile

<i>Dagmar Raczyński y Claudia Serrano</i>	99
Introducción	99
A. Acerca del concepto de capital social y desarrollo	100
1. Necesidad de precisar el concepto de capital social	100
2. Capital social, similitudes y diferencias con otros conceptos	103
3. Beneficios o resultados del capital social.....	105
4. Pobreza en un nuevo enfoque de desarrollo.....	106
B. Políticas y programas de superación de la pobreza en los años noventa en Chile desde la perspectiva del capital social	109
1. Nociones de capital social presentes en la política social de superación de la pobreza en Chile	109
2. Matriz para el seguimiento del capital social en políticas públicas y análisis de programas sociales	110
3. Análisis de cuatro programas	112
C. Conclusiones, lecciones y aprendizajes.....	125
Bibliografía	130

Capítulo V

Programas de superación de la pobreza y capital social: la experiencia argentina

<i>Gabriel Kessler y María Cecilia Roggi</i>	133
Introducción	133
A. Los programas analizados en el contexto de las políticas sociales de los años noventa	135
B. Capital social y programas sociales	141
1. La modalidad de implementación de los programas	141
2. Capital social comunitario.....	144
3. Capital social de puente.....	149
4. Capital social de escalera	150
5. Las contraprestaciones	153
C. Reflexiones sobre la sustentabilidad.....	156
Bibliografía	158

Capítulo VI

Desarrollo redistributivo y capital social: el caso del presupuesto participativo de Porto Alegre, Brasil

<i>Zander Navarro</i>	161
Introducción	161
A. Porto Alegre: breve panorama	171

B.	Presupuesto participativo de Porto Alegre: algunos de sus principales resultados.....	173
1.	PP: breves observaciones sobre la participación	176
2.	Elaboración del presupuesto y sus impactos: un breve comentario sobre la eficiencia del funcionamiento del gobierno	179
C.	Capital social y presupuesto participativo: equidad, organización social y conciencia cívica	180
1.	El capital social ¿es sinónimo de organización social?	183
2.	El capital social ¿acrecienta la “conciencia social y política” de los ciudadanos?.....	185
D.	Capital social y reducción de la pobreza en Porto Alegre	187
E.	Conclusiones	188
	Bibliografía	191

Tercera parte

	Los aprendizajes	195
--	------------------------	-----

Capítulo VII

Propuestas para el diseño de programas de superación de la Pobreza desde el enfoque de capital social

	<i>Irma Arriagada y Francisca Miranda</i>	197
	Introducción	197
A.	Matriz para el análisis de los programas sociales desde la perspectiva del capital social.....	199
1.	Preguntas iniciales	199
2.	El diagnóstico del capital social preexistente.....	203
3.	Impactos esperados e inesperados en el capital social	212
4.	Herramientas claves para programas sociales con enfoque de capital social.....	215
5.	Herramientas vinculadas a la institucionalidad	221
B.	Reflexiones finales sobre la sustentabilidad de los programas	223
	Bibliografía	226

	Publicaciones de la CEPAL	229
--	--	-----

Índice de cuadros y gráficos

Cuadro III.1	México 2002: cobertura de beneficiarios del programa Oportunidades.....	70
Cuadro IV.1	Matriz para el análisis de programas sociales desde la perspectiva del capital social	111
Cuadro V.1	Argentina: programas sociales analizados.....	139
Cuadro VI.1	Red de alcantarillado construida en la ciudad de Porto Alegre, varios años.....	175
Cuadro VI.2	Participación en el PP: total de las rondas y plenarias temáticas	177
Cuadro VII.1	Matriz para el análisis de programas sociales desde la perspectiva del capital social	202
Gráfico I.1	Estrategia de vida	26
Gráfico II.1	Tres planos de recursos en el sistema social	50
Gráfico II.2	Interfaces entre esferas de acción	52
Gráfico VI.1	Presupuesto participativo de Porto Alegre: tendencia observada al comparar las inversiones per cápita versus la renta media de las regiones componentes del mecanismo, 1992-2000	188

Segunda parte
Las experiencias

Capítulo III

México: Oportunidades y capital social

*Mercedes González de la Rocha*¹

Introducción²

México ocupa el duodécimo nivel en la escala de las economías del Banco Mundial y, sin embargo, se caracteriza por una fuerte desigualdad social y un número muy significativo de pobres.³ Los logros recientes en algunas dimensiones —relativa estabilidad económica después de profundas y sucesivas crisis, y relativa democratización de la vida política— se ensombrecen ante un panorama social signado por enormes brechas sociales y un preocupante crecimiento de la pobreza durante las últimas dos décadas.⁴ Por otra parte, en diversos estudios etnográficos se

¹ Consultora de CEPAL y profesora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México (CIESAS) mercedes@ciesasoccidente.edu.mx.

² Agradezco a mi colega y compañero Agustín Escobar su muy valiosa colaboración en la elaboración de este documento. Sus comentarios y sugerencias fueron incorporados, y muchos párrafos fueron revisados a la luz de sus críticas. Con Agustín Escobar hemos trabajado en distintas fases de una evaluación cualitativa de los programas Progresá y Oportunidades desde fines de los años noventa hasta la fecha. Muchas de las ideas aquí plasmadas han surgido en nuestras conversaciones a lo largo de esta experiencia.

³ En el año 1999, de acuerdo con su producto nacional bruto (Banco Mundial, 2001).

⁴ De 52,6% de personas en 1992 a 53,7% en el año 2000 estaban por debajo de la línea 3 (patrimonial) de pobreza construida por el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza (2002). Los cálculos provienen del análisis que sobre la evolución de la pobreza

ha dado cuenta del proceso de erosión del tejido social ante las amenazas que la pobreza y la inseguridad del empleo imponen a la solidaridad, la reciprocidad y las relaciones sociales horizontales que dan lugar a los sistemas de ayuda mutua. Hay cada vez más evidencias de que la pobreza actual está acompañada de situaciones de aislamiento y mayor segregación social, tanto en México como en otros países de la región (Bazán, 1998 y 1999; Estrada, 1999; González de la Rocha, 1999, 2000a y 2001; Auyero, 2000; Kaztman, 1999, 2002; Filgueira, 2002; Feijoó, 2001).

Si el 18,6% de los mexicanos no cuentan con ingresos para cubrir las necesidades mínimas de alimentación, podemos pensar que hay un número muy elevado de personas y grupos domésticos que, por lo tanto, no tienen los recursos para cubrir un fondo social (y ceremonial).⁵ La falta de recursos para dedicar al mantenimiento de relaciones sociales puede llegar a afectar drásticamente la capacidad de entablar intercambios recíprocos, tema fundamental para un artículo como el que aquí se presenta. La reciprocidad, como se ha documentado en diversos estudios, tiene costos, y las relaciones sociales de apoyo mutuo y solidaridad no son recursos inagotables. Estas tienen que ser construidas y mantenidas y para ello se requiere contar con recursos. La carencia de recursos para alimentar el fondo social conduce al gradual o súbito proceso de exclusión de las redes sociales (González de la Rocha, 1999, 2000a).

Mientras el Banco Mundial presiona a los gobiernos latinoamericanos para que creen "más sociedad", construyan lazos de confianza

en la última década del siglo XX realizaron Cortés y otros (2002). La línea 3 de pobreza "se refiere a todos aquellos hogares cuyo ingreso es insuficiente como para cubrir las necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público —equivalentes a 28,1 y 41,8 pesos diarios de 2000 por persona en áreas rurales y urbanas, respectivamente" (op. cit., p. 9). Mientras que la línea 1 se refiere a los hogares cuyo ingreso es insuficiente para cubrir las necesidades mínimas por persona de alimentación (15,4 en áreas rurales y 20,9 pesos diarios de agosto del año 2000 en áreas urbanas). La línea 2 considera a los hogares con ingresos insuficientes para cubrir las necesidades de alimentación y para cubrir gastos mínimos en educación y salud (18,9 pesos del año 2000 en áreas rurales, y 24,7 pesos diarios en áreas urbanas). Los cálculos para estas dos primeras líneas, naturalmente, arrojan cifras de pobreza más bajas que las de la línea 3: 18,6% y 25,3% de hogares, según la primera y la segunda línea, y 24,2% y 31,9% de individuos, según la segunda. En todos los casos, sin embargo, la evolución es ascendente (véase el cuadro III.2, "México. Proporción de la población pobre, 1992-2000", op. cit., p. 16). En los cálculos oficiales más recientes se advierte que en el curso de los últimos dos años, de 2000 a 2002, el ingreso por hogar se redujo en términos reales un 2,6% para el conjunto de los hogares. Sin embargo, se observa que durante este último período los estratos más pobres se vieron protegidos e incluso mejoraron sus ingresos (SEDESOL, 2003a).

⁵ Esta idea proviene del clásico argumento de Eric Wolf sobre los distintos fondos que componen la economía campesina. Uno de ellos es el fondo ceremonial, que incluye los gastos que las familias tienen que hacer para formar parte de la vida social —ceremonial, simbólica, cultural— de la comunidad (Wolf, 1966).

entre los pobres y actúen contra el deterioro de las instituciones que tradicionalmente han operado como defensas o amortiguado los impactos y reajustes económicos, algunos estudiosos manifiestan su escepticismo respecto de esos intentos. Hay quienes, por ejemplo, plantean que esos argumentos no consideran el hecho de que la política no debe ser predicada sobre la idea histórica de la eficacia universal de la familia y la comunidad (las viejas "defensas", véase Abel y Lewis, 2002). En una encuesta recientemente efectuada en México se muestra la escasa utilidad de la comunidad para ayudar a los pobres a enfrentar sus problemas, aunque se sigue confiando en la capacidad de la familia para ello.⁶

En otros estudios se argumenta que las narrativas etnográficas y las ideas en torno de las formas de sobrevivencia y acción de los pobres que se construyeron en el pasado no pueden ser replicadas para explicar la realidad actual (González de la Rocha, 2001), y que la adaptabilidad a las crisis —las estrategias domésticas de sobrevivencia y los sistemas informales de apoyo— ya no puede ser considerada como la solución a los problemas de exclusión laboral y social (Abel y Lewis, 2002; González de la Rocha, 2001). Como estos y otros autores han señalado, las sucesivas crisis económicas y los efectos de la exclusión laboral de los últimos tiempos han provocado un proceso de deterioro y desaparición de los activos familiares, desde la venta de muebles y enseres domésticos para contar con dinero para destinar al consumo básico (alimentación), hasta la escasez de tiempo (y dinero) para dedicar al acceso a bienes sociales y al mantenimiento de las relaciones de ayuda mutua y reciprocidad. Todo ello provoca un proceso de acumulación de desventajas y aumenta la vulnerabilidad de los pobres.

En este contexto, las acciones que el gobierno federal de Fox ha emprendido contra la pobreza, por medio del actual Programa Oportunidades (antes Progresá), son vistas como una tarea tan compleja como impostergable. El Programa Oportunidades se constituye como uno de los pilares de la política social actual para paliar los estragos de la distribución distorsionada de recursos y de opciones en los mercados laborales y productivos, mediante acciones orientadas al fortalecimiento del capital humano (Vázquez Mota, 2002; Székely, 2002). En este artículo

⁶ Se trata de la encuesta "¿Qué dicen los pobres?", de la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), agosto de 2003. Esta encuesta se aplicó a una muestra representativa nacional de pobres "patrimoniales"; la línea más alta de pobreza fue definida por el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza designado por SEDESOL (para su definición véase la nota 10). Aproximadamente el 50% de los informantes se encuentran por encima de la línea de pobreza utilizada por el Programa Oportunidades, que sigue una metodología distinta de definición de sus beneficiarios, y por esta razón las respuestas que se mencionan en este párrafo corresponden a una amplia diversidad de pobres, beneficiarios o no del programa en cuestión.

se discuten los principales elementos del Programa Oportunidades, en el marco de la evolución de la política social en México y América Latina, desde que fue fundado bajo el nombre de Progresá en 1996.⁷ Se ha dado, como veremos, un proceso de inclusión de temas, conceptos y paradigmas teóricos tanto en la discusión como en la evolución misma de la política social. Tal es el caso de los conceptos capital humano y capital social, que forman parte del paradigma actualmente en boga y se han convertido en herramientas clave de los programas latinoamericanos de combate a la pobreza. Y aunque el Oportunidades no es un programa en el que se proponga alcanzar un impacto directo en la capacidad de los individuos y familias de formar parte de constelaciones sociales, resulta crucial preguntarse por los efectos que un programa como este puede llegar a tener en el acceso y manejo de los recursos sociales de los grupos domésticos y las comunidades. Podemos plantear, a nivel de hipótesis, que las transferencias en efectivo que el programa otorga a las familias beneficiarias incrementa las posibilidades de contar con ingresos extras para dedicar al consumo, la educación, la salud, y también para el mantenimiento de las relaciones sociales. Pero, en la medida en que el Oportunidades selecciona a su población objetivo por medio de la focalización, y en las comunidades coexisten familias beneficiarias y no beneficiarias, el programa puede incrementar las divisiones sociales, las rupturas de lazos y vínculos preexistentes (CIESAS, 1998; Adato, 2000), y generar resentimientos hacia el gobierno entre las familias no beneficiarias, así como sentimientos de envidia respecto de los que gozan de los beneficios del programa (Adato, 2000).

Este estudio tiene un doble propósito:

i) ubicar al Programa Oportunidades en el contexto de la política social latinoamericana, con sus tendencias recientes de "promover lo social". La reflexión pretende situar a la política social actual a la luz de los paradigmas de políticas sociales de América Latina. Un ejercicio así no es estéril. Brinda los elementos para entender la política social en el marco de los modelos de economía política que se han instrumentado en los países latinoamericanos, lo que constituye un panorama útil para analizar programas específicos y ver más claramente los caminos que se han tomado para intentar atender las necesidades y problemas de los pobres; y

⁷ A partir de 2002, el programa adquiere un nuevo nombre y algunas nuevas características. En particular, desde entonces la coordinación nacional ha manifestado un interés especial en el fomento y la conservación del capital social comunitario. Sin embargo, nos referiremos al conjunto de evaluaciones de ambos programas como uno solo, ya que los rasgos básicos (selección técnica de los beneficiarios, transferencias en efectivo y especie, y corresponsabilidad) no han cambiado. Aunque sí se pretende fortalecer el tejido social y comunitario.

ii) discutir los efectos más relevantes del Programa Oportunidades en las relaciones sociales que los individuos tejen en su vida cotidiana, bajo la perspectiva de algunas posiciones del debate sobre capital social. Conviene señalar que el desarrollo conceptual en torno de la noción de capital social ha ocurrido en paralelo a la discusión de la política social y la pobreza, y han sido escasos los intentos por construir puentes entre ambos cuerpos de ideas, a pesar de la existencia de ejes en los que convergen. Nos basamos aquí en los aportes conceptuales de autores seleccionados para la interpretación de la información proveniente de distintas evaluaciones del programa.^{8,9}

A. Del minimalismo a la nueva política social

"...the winter of discontent of the Washington consensus is made glorious summer for the post-Washington consensus through the instrument of social capital "
(Fine, 2001)

Los paradigmas de política social responden a los modelos económicos imperantes en la sociedad (CEPAL, 1995). Así, la política social latinoamericana ha experimentado procesos de transición, cambio y reestructuración entre el paradigma vigente en la región durante el período de industrialización por la vía de la sustitución de las importaciones, el minimalismo (Abel y Lewis, 2002) de la década de 1980 y el paradigma que emergió al gestarse y consolidarse el modelo económico de apertura económica hacia el exterior. La política social mexicana ha estado íntimamente ligada a la política económica y ha seguido, en términos generales, la transición aquí planteada, aunque

⁸ La bibliografía sobre el tema es sumamente numerosa y su revisión exhaustiva rebasa los límites de espacio y tiempo para la elaboración de este estudio. Los esfuerzos de la CEPAL, materializados en obras publicadas que unen la discusión del concepto de capital social con la política social y la reducción de la pobreza, son una notable excepción del desarrollo conceptual paralelo que ha mantenido separados ambos campos: política social y capital social.

⁹ Me refiero, particularmente, al análisis de Adato (2000) y a las investigaciones antropológicas que forman parte de la evaluación cualitativa de impacto que con Agustín Escobar hemos realizado en el curso de los últimos cinco años en comunidades rurales y semi urbanas (Escobar y González de la Rocha, 2000, 2002; González de la Rocha y otros, 2002). En el estudio de Adato se responde a interrogantes específicas sobre el impacto del programa PROGRESA en las relaciones sociales comunitarias. Los de Escobar y González de la Rocha son estudios en que se analizan los cambios en la vulnerabilidad de los grupos domésticos beneficiarios por medio de un seguimiento del mismo universo de familias, bajo la perspectiva de análisis de los activos y la estructura de oportunidades, donde se incluye la capacidad de entablar y mantener relaciones sociales, entre muchos otros temas.

prevalece la coexistencia de rasgos de uno y otro paradigma dando lugar a lo que hemos llamado un híbrido paradigmático (González de la Rocha 1997, 2000b).

El acento social latinoamericano estuvo puesto, durante la vigencia del primer modelo, en la protección —desde una lógica burocrática, con estrategias macro y filosofías universalistas— de los trabajadores asalariados, a menudo organizados en sindicatos con agendas reivindicativas, y en la creación y consolidación de los sectores medios para asegurar la capacidad de compra de los bienes producidos a nivel nacional (CEPAL, 1995). Las necesidades de los más pobres poco se consideraban en estos esfuerzos, en los que predominó la expansión de servicios de salud y educación sectorial y espacialmente restringida (Abel y Lewis, 2002). El Estado centralizado y monopolístico jugó, en este paradigma, el papel de interventor, empresario y agente “social” y, en opinión de algunos estudiosos, el resultado de la política social, cualquiera que fuera la intención, fue el de perpetuar la desigualdad y mantener intacta la geografía latinoamericana de la pobreza (Abel y Lewis, 2002).

Durante el período histórico de la industrialización, por la vía de sustituir las importaciones, la política social mexicana se caracterizó, entre otras cosas, por la provisión de una amplia red de subsidios al consumo de corte universal, lo que se convirtió en un apoyo gubernamental al crecimiento del sector industrial y la expansión de las clases medias en gran medida permitido por el elevado crecimiento económico. En el transcurso de estos años la pobreza experimentó un descenso considerable (Székely, 2002), aunque aumentó la desigualdad entre los últimos años de la década de 1950 y el final de los años setenta (Tello, 1991). A pesar de todo y a los inaceptables niveles de pobreza con que México llega a la década perdida, el período previo a la crisis fue de relativa estabilidad económica, lo que permitió la creación de instituciones y programas sociales gubernamentales cuya finalidad era la protección y promoción de los intereses de los trabajadores y campesinos (Tello, 1991).

Para toda América Latina, el decenio de 1980 trajo consigo el retraimiento del Estado respecto de la provisión de servicios y acciones en materia social. Es la llamada década perdida que separa del siguiente período paradigma de sustitución de importaciones (ISI), no sin dejar una marca casi indeleble: el aumento dramático de la pobreza. En México, como en la mayoría de los países de la región, la crisis de la deuda de principios de los años ochenta, con sus agudas restricciones macroeconómicas, provocó el desmantelamiento del sistema de subsidios y la política social se convirtió en un asunto minimalista (Abel y Lewis,

2002) y marginal, como resultado de las políticas impuestas por el Consenso de Washington, incluido el rechazo al "intervencionismo excesivo" del Estado (Fine, 2001). En este período, como sabemos, los pobres mexicanos experimentaron una crisis sin precedentes en sus precarias economías domésticas (González de la Rocha y Escobar, 1986; González de la Rocha, 1988, 1991). Los salarios reales se desplomaron y el gasto gubernamental en educación y salud disminuyó drásticamente, lo que desencadenó el deterioro de las condiciones de vida de la mayor parte de la población y de la disponibilidad de estos servicios. La ausencia de apoyos gubernamentales (mediante subsidios e inversiones para el desarrollo y en el sector social) se sumó a elevadas tasas de inflación y a un proceso dramático de restricción del consumo a pesar del aumento del número de trabajadores en los hogares, donde las mujeres jugaron un papel muy importante (González de la Rocha, 1994, 1991; Cordera y González, 1991; Tello, 1991). La pobreza creció tanto en términos relativos como absolutos (de 32,1 a 41,3 millones de habitantes entre 1982 y 1989; véase Tello, 1991), pero se redujo la desigualdad social como parte de un proceso de "equidad por empobrecimiento" (Cortés y Rubalcava, 1991).

A partir del inicio de la década de 1990, distintos autores han documentado el reciente proceso de aumento gradual de la importancia de la política social en la mayor parte de los países de la región. Según Hardy (2003), la política social empieza a existir en América Latina durante el decenio de 1990, vista a la luz del incremento significativo del gasto social per cápita, del gasto social en relación con el producto interno bruto (PIB) de cada país y de las redefiniciones e innovaciones a que fue sujeta.¹⁰ Sin duda, las políticas y programas específicos relacionados con la pobreza gozan desde entonces de una prioridad sin precedentes en toda la región (Abel y Lewis, 2002). Los Estados latinoamericanos se han orientado a la acción en materia social, impulsados por los postulados del Consenso post Washington (Fine, 2001). El paradigma de política social, que emerge en América Latina con el modelo económico "de puertas hacia afuera" de los años noventa, pone el acento en la inversión en capital humano, y el Estado se convierte en regulador y en un agente "neosocial" que coexiste con la participación activa de subsectores estatales, privados y ONG, de una manera más plural y menos centralizada en su propia figura. Aquí, la asignación de proyectos es

¹⁰ El gasto social per cápita pasó de 251 a 365 dólares entre 1990 y 1999 en los países de gasto medio, grupo en el que se encuentran Colombia, México y Venezuela. Según la misma fuente, los países de alto gasto social (Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Panamá y Uruguay) aumentaron su gasto social per cápita de 796 a 1.055 dólares durante el mismo período, mientras que los de gasto social bajo (Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana) disponían de 113 dólares en 1999, en comparación con 58 dólares per cápita para el gasto social (Hardy, op. cit., con datos de la CEPAL).

competitiva y los usuarios proponen, a diferencia de la ausencia de participación de estos en el paradigma anterior. Aparece la focalización como el método idóneo para prestar atención a poblaciones objetivo.

El enfoque de este tipo de política social no hace hincapié en la ampliación de la cobertura, sino en producir cambios en las condiciones de la población que pueden y deben ser medidos con criterios de identificación y metodologías de evaluación de acuerdo con líneas base de diagnóstico y líneas de comparación (CEPAL, 1995). Inspirada por los estudios que proliferaron durante los años ochenta en toda América Latina, que subrayaron la capacidad para la acción (agency) de los pobres y el potencial de los sistemas de apoyo y reciprocidad, la política social ha procurado promover dichas "virtudes", incluido aquí el llamado capital social (Abel y Lewis, 2002). El papel que ha jugado el Banco Mundial o, mejor dicho, el consenso post Washington, es clave para entender estos procesos. Se procura que la intervención del Estado sea más amplia y profunda, se rechaza la idea de que el Estado y el mercado son instituciones contrapuestas y se plantea su complementariedad, de modo que el primero debe actuar ante las imperfecciones del segundo, y se persigue recuperar la dimensión social (Fine, 2001).¹¹

La implementación de las primeras reformas estructurales enmarca a la tercera fase de la política social mexicana. Según Székely (2002), es a fines del decenio de 1980 cuando el gobierno mexicano reconoce explícitamente el profundo impacto que el estancamiento de la economía produjo en los grupos más desfavorecidos y, bajo la lógica de maximización del efecto de los programas sociales (en un contexto de recursos escasos), la política social empieza a operar mediante la focalización (población objetivo). El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) operó, durante el sexenio de Salinas de Gortari, basado en el principio de la participación social. Para Escobar (2003a), este período marca un hito en la política social mexicana. La redefinición de la política social como una política pública distinta de la económica incluye la prioridad de la focalización versus subsidios universales y promueve la participación de instancias internacionales, donde el Banco Mundial juega un papel primordial en el diseño, seguimiento y evaluación de la nueva política social mexicana (Escobar, 2003a). Este programa no hizo hincapié en el capital social, sino en un amplio abanico de acciones que fueron

¹¹ Concordamos con Molyneux (2002) cuando afirma que lo que ahora se entiende como capital social no es un fenómeno nuevo en América Latina, sino que lo que es nuevo es el movimiento de esos temas desde los márgenes de la práctica del desarrollo al lugar central que ahora ocupan en la arena política regional e internacional. Solidaridad y participación grupal, movimientos de mujeres y en general movimientos populares que, aunque casi desaparecieron durante los años noventa, fueron importantes en el desarrollo sociopolítico latinoamericano.

desde la infraestructura hasta el microcrédito para mujeres. Este primer tipo de focalización post crisis ha sido señalado como neopopulista (Dresser, 1991).

Otros autores han mostrado que las zonas y regiones más pobres no recibieron sus beneficios. Las acciones del PRONASOL se orientaron hacia estados y regiones clave por razones electorales (Molinar y Weldon, 1994; Roberts y Escobar, 1997). Por otra parte, este programa se anunció como una acción concertada de combate a la pobreza, pero nunca se pudo demostrar que la redujera, salvo en el caso de las becas en efectivo del Programa Niños en Solidaridad (Chávez (comp.), 1994).

Los años de recuperación económica del segundo quinquenio de los noventa, que sobrevinieron a la crisis de 1994-1995, permitieron destinar mayores recursos a los programas sociales (Székely, 2002). El surgimiento del Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), creado durante el sexenio de Zedillo y antecesor del actual Programa Oportunidades, continúa y consolida el principio de selección de poblaciones objetivo por medio de criterios técnicos resumidos en indicadores de pobreza, procura impedir la interferencia de autoridades locales con el fin de evitar sesgos electorales y clientelistas, y establece como norma y requisito indispensable la corresponsabilidad de los beneficiarios (Escobar, 2003a). El ProgresA se orientó a la construcción de capital humano como único objetivo, mediante el impacto en las tres dimensiones de su operación (educación, salud y alimentación). A pesar de estas innovaciones que se acercan al paradigma que emerge con la economía abierta y neoliberal, persisten rasgos del paradigma anterior: el monopolio del Estado continúa como un rasgo fuerte, no obstante que otros sectores —subsectores estatales, privados, ONG y la familia— se constituyen como actores cada vez más importantes. Igualmente, si bien hay un cambio hacia una mayor descentralización, la política social sigue siendo un “asunto de Estado” y no un (o varios) “asunto(s) de estados”.

Aunque la pluralidad empezó a ser un rasgo de la vida política y social mexicana, esta se ha dejado sentir en otras esferas y dimensiones de la vida nacional y no tanto en el diseño e implementación de la política social. La persistencia de elementos del paradigma anterior —usuarios que ni proponen ni eligen, ausencia de cofinanciamientos en un contexto donde impera una estrategia macro en que los recursos y los financiamientos provienen básicamente del Estado— coexiste con la emergencia de nuevos elementos, en los que destaca la corresponsabilidad de los beneficiarios de los programas y la transferencia de dinero en efectivo que los usuarios pueden usar más libremente en el mercado. La coexistencia de elementos de ambos paradigmas ha moldeado a la política social mexicana de estos días en un híbrido paradigmático, como probablemente sea el caso en

otros países de la región (González de la Rocha, 1997, 2000b). Por una parte, la educación pública sigue los principios de una filosofía universalista en que se la ofrece a todos por igual pero, por otra, el Progreso —y actualmente el Programa Oportunidades— transfiere becas educativas (en efectivo) a las familias seleccionadas por el programa. Los criterios de asignación y la población objetivo son, en la política social actual, claramente de carácter emergente: responden a la idea de concentrarse en los más pobres y el enfoque adoptado no pone el acento en la ampliación de la cobertura, sino en producir un cambio en las condiciones de la población cubierta por el programa. Se trata de un enfoque en que se pretende medir el impacto de la política social, para lo que se requieren criterios de identificación y una metodología de evaluación de acuerdo con una línea base de diagnóstico y una línea de comparación (González de la Rocha, 1997; 2000b). Como veremos, a partir de 1999 se han contratado evaluaciones externas para llevar a cabo estas tareas, además de los mecanismos de evaluación y seguimiento internos al programa.

La política social está contextual e históricamente moldeada, y en el caso de México se muestran las transiciones que han sido impulsadas por la política económica en distintas etapas de su historia reciente. El siguiente apartado está destinado a presentar, en términos muy generales, el programa actualmente en marcha en materia de pobreza.

B. Oportunidades para los pobres

El Programa Oportunidades nace de las entrañas de su antecesor Progreso. Durante los primeros meses del gobierno de Fox se mantuvo vigente el programa anterior, y poco tiempo después cambió de nombre —conservando su esencia y formas de operación— por el actual de Oportunidades. Se inició, como Progreso, operando únicamente en comunidades rurales de alta marginalidad, pero con acceso a unidades de salud y a escuelas, y ha aumentado gradualmente su cobertura hacia comunidades semi urbanas y urbanas:

Cuadro III.1
MÉXICO 2002: COBERTURA DE BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA OPORTUNIDADES
(Por zonas)

Zonas	Municipios	Localidades	Hogares
Rural	2 294	68 439	2 990 344
Semi-urbana	1 237	2 194	741 211
Urbana	391	419	508 446
Totales	2 356	71 052	4 240 000

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Oportunidades/SEDESOL [en línea] <http://www.sedesol.gob.mx>.

La operación del programa ha estado enmarcada en un proceso de redefinición de la política social. El esquema conceptual de los activos y las estructuras de oportunidades (Moser, 1996; Kaztman, 1999) han dejado su sello en los textos de funcionarios de alto nivel en el interior de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Por una parte, se quiere incidir en el acervo de activos generadores de ingresos, tomando en cuenta las oportunidades para su utilización en la ampliación de las capacidades y el patrimonio de los individuos y las familias, así como la protección ante los riesgos. Todo ello forma parte de una estrategia más amplia denominada CONTIGO, en la que se incluye al Programa Oportunidades.¹² Para Escobar (2003a), lo más novedoso e importante que ha sucedido durante estos últimos años es que los ejes actuales de la política social son, por una parte, la operación de todos los programas con reglas técnicas de selección que privilegien a las poblaciones objetivo; por otra, la afinación y medición del efecto de cada programa y, por último, la insistencia en la participación de la población objetivo en la producción de su propio bienestar: en el empleo, en mejoras a los barrios y comunidades y, en general, en la cogestión como pivote de la sinergia que se espera obtener. Y aunque el acento en el capital humano persiste, este es visto ahora como un vehículo para las mejoras en el bienestar, y no como un fin en sí mismo (Escobar, 2003a).

El Programa Oportunidades se presenta como un programa de desarrollo humano basado en la corresponsabilidad, en el que se procura la equidad (incluida la de género) y la reducción de las desigualdades. Aunque se centra en la familia, intenta fortalecer el tejido social y comunitario, pero no se han emprendido acciones específicas para ello. Se persigue, también, promover el liderazgo de mujeres (véase Oportunidades/SEDESOL, www.sedesol.gob.mx). Su operación se divide en tres grandes rubros:

- *Educación*: en el programa se ofrecen becas educativas y apoyo para útiles escolares. Las becas son en efectivo y se asignan a los hijos de las familias seleccionadas que cursan entre el tercer grado de primaria y el tercer año del nivel medio superior. A partir del primero de secundaria, el monto de las becas escolares es mayor para las mujeres, con el fin de estimular el paso femenino de la primaria a la secundaria y la permanencia de las jóvenes en la escuela.
- *Salud*: tiene como objetivo brindar atención primaria y educación para la salud por medio de un paquete esencial de

¹² La discusión de la estrategia CONTIGO no será incluida en este texto por limitaciones de espacio.

servicios, que es gratuito, y capacitación (en forma de pláticas mensuales) en materia de salud, nutrición e higiene con el fin de estimular el autocuidado de la salud.

- *Alimentación:* en el programa se transfieren apoyos monetarios a todas las familias seleccionadas, además de suplementos nutricionales. Los suplementos son para todos los niños menores de 2 años, las mujeres embarazadas y los niños de 2 a 5 años que presentan desnutrición.

Las mujeres-madres son las titulares del programa y quienes reciben los apoyos. Tanto el dinero de las becas educativas como el que corresponde al apoyo alimentario es enviado bimensualmente a las mujeres titulares por medio de transferencias electrónicas. Los apoyos están condicionados al cumplimiento de las corresponsabilidades por parte de las familias beneficiarias:

- registro en las unidades de salud y cumplimiento de las citas médicas;
- asistencia mensual a las pláticas educativas de salud;
- certificación de que los niños y jóvenes están inscritos en planteles educativos y acuden a la escuela de forma regular.

En la selección de las familias se ha seguido una metodología por etapas: la primera etapa de focalización corresponde a la selección de las localidades, por medio de indicadores —construidos por el Consejo Nacional de Población (CONAPO)— de alta marginalidad. La segunda etapa de focalización se basa en un censo de todos los hogares en el interior de las localidades seleccionadas, con el fin de llegar a los hogares más necesitados de las regiones más pobres del país. La tercera etapa consiste en la depuración de la lista de hogares seleccionados en asambleas comunitarias.

A partir del 2001 y de la incursión del programa en áreas semi urbanas y urbanas, programa se han ensayado dos nuevas vías de incorporación de beneficiarios. La primera consistió en la selección de áreas geoestadísticas básicas (AGEBs) semi urbanas con una mayor concentración de hogares pobres y de rezagos en la dotación de servicios. Los municipios tuvieron la posibilidad de corregir esta selección basada en el censo de población del año 2000. Una vez hecho lo anterior, una brigada de encuestadores recopiló información sobre los hogares en las zonas seleccionadas, y sobre esta base, se decidió la inclusión de algunos hogares en el programa. En 2002, cuando el programa se expande a grandes zonas urbanas de más de 50.000 habitantes, el cambio más significativo es que los potenciales beneficiarios tienen por primera vez la opción de solicitar ser evaluados para su incorporación. Esto se realiza en

módulos instalados en edificios públicos dentro de conjuntos de manzanas con porcentajes particularmente altos de hogares pobres. Posteriormente, la información se amplía y verifica en visitas a los hogares. Estas dos estrategias responden a la mucho mayor dispersión y menor proporción de hogares pobres en zonas urbanas, que hacen impráctico, por lo costoso, el sistema de censos de localidades enteras.

Inicialmente, en la asamblea de incorporación, las mujeres seleccionadas como beneficiarias elegían a una o más representantes, llamadas promotoras, quienes se encargaban de informarlas sobre la operación del programa (días y lugares de pago, calendarios de pláticas y citas, procedimientos de incorporación o cambio de alumnos becarios del programa), de enviar la información sobre las corresponsabilidades a las oficinas centrales, y de distribuir los suplementos alimenticios. Por estos servicios no recibían ningún pago. La pesada carga de estas responsabilidades nos movió, como evaluadores externos, a proponer vías para aligerarla, cosa que sucedió en el año 2000 con la transferencia de algunas de sus labores a los "enlaces municipales" del programa, quienes normalmente eran los regidores o funcionarios encargados de asuntos sociales en los municipios.

En 2002, y con la finalidad de desconcentrar el poder de las promotoras y evitar así posibles actos de corrupción, se cambia a un sistema de "vocales" de salud y educación, que pueden ser más numerosas (con menos trabajo cada una) y que en términos formales son elegidas por las beneficiarias en asambleas de incorporación. Sin embargo, también pueden ser propuestas por médicos o maestros, y con alguna frecuencia sus candidatas son refrendadas en el curso de estas asambleas.

En las distintas evaluaciones que se han realizado se constata que la selección errónea de casos y la exclusión de familias que deberían estar incluidas por sus condiciones de pobreza, son unos de los principales problemas del programa (Adato, 2000; Escobar, 1999 y 2003b, Escobar y González de la Rocha, 2002).¹³ Ello ha provocado la insatisfacción de

¹³ La identificación de los beneficiarios se ha basado, en las zonas rurales, en la instrumentación de un censo para obtener datos sobre las condiciones socioeconómicas de las familias de las localidades seleccionadas. Tanto en el estudio de Adato (op. cit.) como en la evaluación realizada por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en Occidente (CIESAS Occidente), se documentan muchos casos en los que familias muy pobres fueron excluidas del programa por diversas razones: o bien no había nadie en casa en el momento en que los encuestadores llegaron (las mujeres estaban trabajando o estaban de compras, entre otras causas) y los encuestadores no regresaron, o bien la gente no respondía con la verdad al cuestionario (porque no sabían cuál era el propósito) y proporcionaban información falsa (exageraban acerca de sus recursos porque les daba vergüenza admitir que eran muy pobres, no sabían las condiciones del hogar y no entendían las preguntas por diferencias de lenguaje). Tanto los médicos como los maestros y directores de escuela, promotoras y

muchos que se saben pobres y no entienden las razones por las que quedaron fuera del programa. La insatisfacción con respecto a la forma en que las familias beneficiarias fueron seleccionadas no es un problema irrelevante. De hecho, forma parte de un tema central en este trabajo: la posible gestación de divisiones sociales dentro de las comunidades debido a que la percepción sobre las condiciones propias y de las demás familias no coincide con la de los identificadores técnicos del programa (que definieron quiénes son y quiénes no son pobres) y porque, también, el Programa Oportunidades puede, en la práctica, crear más conflictos y rupturas que elementos de cohesión y solidaridad social. Según Adato (2000), los individuos rurales estudiados por ella se ven a sí mismos, respecto de los demás, como igualmente pobres y, por lo tanto, también necesitados de ayuda. Las mediciones de pobreza usadas por el sistema de focalización contrastan con las percepciones locales de lo que es y significa ser pobre, dando lugar al descontento y frustración de quienes no quedan incluidos. Estas respuestas serán revisadas con detenimiento en otra sección del trabajo.

Otro de los problemas que se han documentado en las distintas evaluaciones tiene que ver, asimismo, con el proceso de selección, pero se describe directamente en la tercera etapa de la focalización arriba mencionada: la depuración de la lista de familias beneficiarias en las asambleas comunitarias. Estas últimas, en un conjunto importante de comunidades, no han operado como fue planeado porque ningún miembro de la comunidad se atreve a plantear explícitamente su opinión (Escobar, 1999; Adato, 2000). Según el estudio de Adato: "Hasta el momento no se ha utilizado a la asamblea para proponer revisiones a la lista" (Adato, 2000, p. 151). En el trabajo de campo de la evaluación cualitativa realizada por Escobar y González de la Rocha se documentan algunas de las razones por las que esto sucede y que tienen estrecha relación con el tema que nos ocupa: el mantenimiento de las relaciones sociales y los intentos que la gente hace de no provocar situaciones antagónicas con los que de hecho son sus vecinos, parientes o compadres. Los individuos de las comunidades estudiadas tratan de evitar conflictos y confrontaciones que surgirían al hacer denuncias públicas sobre la inclusión errónea o injusta de muchas familias. Antes de analizar con detenimiento el efecto del Programa Oportunidades en las relaciones sociales de las familias beneficiarias y no beneficiarias, y en sus

enlaces municipales del programa han dado opiniones que también apuntan a estos problemas. En las zonas semi urbanas se identificaron barrios que en opinión de las autoridades locales son de extrema pobreza y se levantó, en esas localidades, la información socioeconómica para la selección de las familias. En este caso, el principal error de selección tuvo lugar al excluir barrios enteros donde sus residentes quedaron fuera del proceso.

capacidades o habilidades para manejar recursos escasos, en virtud de su participación en redes de relaciones sociales (capital social) (Portes, 1995), es necesario ubicar este análisis en el marco de una reflexión teórico-conceptual sobre el uso de las redes sociales y los sistemas de apoyo, puestos tan en boga tanto por los seguidores como por los críticos del concepto capital social.

C. Reciprocidad, intercambio y capital social

*Se ocupa rayar [salario] para poder participar en undinas [tandas]
(Grupo de enfoque con hombres, Hostotipaquillo, Jalisco)*

Mucho antes de que el concepto de capital social adquiriera la fama de que hoy goza, en la antropología y la sociología se dedicaban muchas páginas al estudio y análisis de las estructuras sociales, las redes de relaciones y el intercambio de bienes y servicios que fluye por dichas constelaciones sociales. Los antropólogos clásicos veían en las relaciones de asociación y conexión el objeto mismo de su reflexión. Los hechos observables, como Radcliffe-Brown (1940) planteó hace muchas décadas, no son las culturas —que son una abstracción y no una realidad concreta— sino los actos de comportamiento y las conexiones en una compleja red de relaciones sociales. Para este autor, esta red de relaciones sociales (estructuras de parentesco, relaciones diádicas) conforma la estructura social y el ser humano es visto como un complejo de relaciones sociales que tienen dimensiones económicas, simbólicas y culturales.

Una parte importante de la reflexión ha estado enfocada en la reciprocidad y en las normas y obligaciones intrínsecas a la pertenencia a redes de relaciones de intercambio social. En los estudios que desde la economía "sustantivista" llevó a cabo Polanyi (1968) se planteaba que el desarrollo de intercambios recíprocos y las transacciones económicas están insertos en estructuras y dinámicas sociales. Marcel Mauss (1966) dio cuenta de las obligaciones de dar, de recibir y de reciprocitar implícitas en las relaciones de intercambio, y del principio de reciprocidad como la base misma de la vida social. La reciprocidad fue considerada por mucho tiempo como una reliquia de sociedades primitivas, pero el mismo Mauss sugirió su existencia en sociedades occidentales contemporáneas. En su investigación sobre las formas de sobrevivencia de los pobres urbanos, Lomnitz (1975) documentó la importancia de la reciprocidad y la confianza para el intercambio social en el contexto del México urbano de los años setenta. Para Lomnitz, la reciprocidad es un modo de intercambio particular que difiere del intercambio de mercado y se encuentra ligado a la existencia de redes o campos sociales que se traducen en estructuras económicas que maximizan la seguridad en un

contexto caracterizado por la inseguridad económica. Es ahí, en el seno de las redes, donde fluyen bienes y servicios de manera recíproca. La confianza, por otra parte, es un ingrediente del intercambio social que se basa en la capacidad de entablar una relación de reciprocidad y en la voluntad de cumplir con las obligaciones implícitas en dicha relación. En el planteamiento de esta autora podemos encontrar dos de los elementos que posteriormente darían pautas a la construcción del concepto capital social. Las redes de reciprocidad, según Lomnitz, brindan la posibilidad de utilizar los recursos sociales no solamente como mecanismos de supervivencia, sino con fines de producción (movilización de recursos inmersos en relaciones sociales, en Bourdieu). La confianza es requisito y parte del proceso de la construcción de las redes (la confianza en la conformidad y cumplimiento de las normas culturales como constituyente del capital social, en Putnam).

La idea de que los recursos sociales pueden ser empleados para fines económicos y productivos, presente en todo un conjunto de investigaciones antropológicas, fue retomada por Portes (1995) para plantear que las transacciones económicas están inmersas en estructuras sociales más amplias, incluidas las redes sociales —que incluyen ingredientes familiares, culturales o afectivos. Las redes, para Portes, son importantes en la vida económica, porque son fuentes para la adquisición de recursos escasos (capital, información). Para este autor, el concepto de capital social alude a la capacidad de los individuos de manejar recursos escasos en virtud de su membresía en redes de relaciones o estructuras sociales más amplias. Los recursos mismos, que pueden ser de naturaleza tangible o intangible, no son capital social, sino que este refiere a la habilidad del individuo de movilizar esos recursos según sus intereses.¹⁴ La noción maussiana de los dones está presente también en el planteamiento de Portes, quien afirma que los recursos movilizados son gratuitos (no tienen un precio en dinero) y tienen forma de “regalos” o “dones”, donde la reciprocidad juega un papel crucial. A diferencia de las expectativas que se generan en los intercambios de mercado, en el caso del flujo de recursos a través del capital social no hay fechas fijadas y las transacciones operan en un tiempo más bien difuso. El intercambio puede darse con distintos tipos de “moneda” (lo que regresa bien puede ser distinto de aquello que formó parte inicial del intercambio). La habilidad para obtener dichos dones (capital social) no radica en el individuo mismo —como es el caso del dinero: capital material, o la educación: capital humano—, sino que es propiedad del conjunto de relaciones que

¹⁴ A diferencia de Coleman, para quien el capital social son los recursos reales o potenciales que se adquieren por medio de relaciones sociales, Portes plantea que los recursos no forman el capital social sino que este es la habilidad o capacidad que los individuos tienen de manejar dichos recursos.

un individuo mantiene con otros. El capital social es producto de la inclusión en esas estructuras sociales (Portes, 1995).

La obligatoriedad, las normas y los valores que forman parte de los intercambios recíprocos y el manejo de recursos sociales a través de la participación en relaciones sociales (capital social), son conceptos que aparecen en los aportes de Bourdieu, Lomnitz, Portes y otros estudiosos del tema. Sin embargo, el cumplimiento de las obligaciones que forman parte de los intercambios recíprocos es pocas veces cuestionado, más bien se da por hecho, aspecto que será retomado posteriormente en este texto. Baste decir aquí que, a pesar de las discrepancias en el significado del concepto y las controversias que ha generado, existe un relativo consenso sobre la importancia de analizar los siguientes aspectos relacionados con el concepto de capital social:

- i) la obligatoriedad (relacionada con normas y valores) del intercambio social;
- ii) la reciprocidad como base de las relaciones sociales;
- iii) los recursos que forman parte de los intercambios recíprocos y la capacidad de manejarlos;
- iv) a diferencia del capital humano —en cuyo caso la inversión es individual—, la inversión en capital social es en las relaciones sociales, a través de las cuales fluyen los recursos, y
- v) las redes sociales como estructuras donde se gesta el capital social.¹⁵

Hablar de capital social en contextos de pobreza impone condiciones específicas que se deben atender. Para Lomnitz (1975), la reciprocidad surge en situaciones de carencia de recursos materiales y es precisamente esa pobreza de recursos la que opera como motor que moviliza los recursos sociales y los convierte en recursos económicos. Más aún, esta autora plantea que la igualdad de carencias es una condición básica para entablar relaciones de confianza, horizontales y recíprocas. En estudios antropológicos realizados en México sobre familias de escasos recursos durante la década de 1980, se sostuvo que la importancia del intercambio social recíproco puede observarse tanto cuando este florece y está asociado a mejoras sustantivas en el bienestar de los individuos y familias que lo practican (mediante la ayuda mutua, el flujo de bienes y servicios), como cuando los individuos y familias han sido privados de la capacidad de entablar estas relaciones sociales y sus beneficios, lo que da lugar a situaciones de extrema precariedad económica (González de la

¹⁵ Respecto de si las relaciones sociales mismas son capital social o este es la habilidad para manejar los recursos que en ellas fluyen, o bien es el conjunto de normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la cooperación respecto de quien es el propietario o beneficiario del capital social (el individuo o la comunidad) (Molyneux, 2002).

Rocha, 1986, 1994). En estudios posteriores se ha documentado el proceso de erosión de los recursos en manos de los pobres, incluidos los sociales, como parte de la espiral de desventajas acumuladas producida por la exclusión laboral y la precariedad de opciones para la generación de ingresos (González de la Rocha, 2000a, 2001).

La aplicación del concepto de capital social a contextos de extrema pobreza, urbana o rural, es una tarea compleja por dos razones importantes. En primer lugar, porque al capital social se le atribuyen, en tanto es accedido por los individuos en su participación en relaciones sociales, los elementos que hacen posible el aumento de los ingresos y las mejoras en el bienestar. Por ejemplo, adquirir buena tierra depende de los contactos —capital social— de cada individuo (o familia) (Perry y Robison, 2001, citados en Robison y otros, 2003). A medida que aumentan los contactos de intercambio de una persona, también lo hacen sus ingresos (Fafchamps y Minten, 1998). Bajo esta perspectiva, la situación de pobreza parece ser atribuida a condiciones individuales de carencia de capital social. Este planteamiento desvía la atención de las condiciones estructurales y sociales (de economía política) que causan, determinan y reproducen la pobreza, y pone el acento en las capacidades individuales de acceder y manejar recursos sociales. En términos de Molyneux (2002), el surgimiento del concepto de capital social coincide con el repliegue de agendas, temas y conceptos “problemáticos” para las elites dominantes y las agencias internacionales de desarrollo. La discusión de la ciudadanía y la integración-inclusión (exclusión) social es política, confronta e incomoda. En cambio, el capital social se centra en fenómenos micro y produce menos desafíos políticos.

Por otra parte, es necesario tomar en cuenta que mientras más integrada esté una persona en una red de relaciones, más obligaciones tiene. Los estudios antropológicos en comunidades campesinas han mostrado que la pertenencia a la comunidad y el prestigio adquirido a lo largo del tiempo —en gran medida basado en el cumplimiento de las obligaciones implícitas a la pertenencia— fuerza a los individuos a aceptar puestos que entrañan el gasto del capital material acumulado y los vuelve a sumir en la pobreza. Este es el caso de Santa María Asunción, en el municipio de Juxtlahuaca, Oaxaca, en donde el gasto ceremonial (dedicado a la celebración de festividades religiosas) es tan elevado que los encargados de dichas celebraciones desearían no ser católicos, a pesar del rechazo social y el estigma que sufren los que profesan otras religiones (Anaya, mimeo; véase también Wolf (1966) respecto del fondo ceremonial). En este caso, la densidad de relaciones y la capacidad de control social que los hace aceptar y realizar lo que la comunidad espera de ellos, más que permitirles movilizar recursos de relaciones sociales, los obliga a destinarlos solo a lo que es socialmente aceptado (Escobar, 2003b). Ello refleja los costos

escondidos de la sociabilidad de los que habla Portes (1995) al plantear que no debemos perder de vista que la misma dinámica social que produce dones generosos y altruistas y concede favores, puede también restringir a los individuos en sus intereses económicos personales. En comunidades pobres, donde los individuos y familias sostienen una lucha cotidiana por obtener ingresos apenas suficientes para la alimentación, cumplir con las obligaciones de la sociabilidad se convierte en una tarea sumamente difícil. En estos contextos, las espirales de acumulación e innovación —propulsadas por el capital social— encuentran muchos obstáculos y, más bien, podemos esperar que el balance entre los costos y los beneficios de la sociabilidad derive en situaciones que restan fuerza a los intentos de innovación económica (Portes, 1995) o en otras donde la sociabilidad misma esté amenazada. En otras palabras, la capacidad de entablar relaciones sociales y hacer uso de los recursos que circulan en las redes aumenta cuando las condiciones materiales permiten la inversión —de tiempo y otros recursos— en las redes sociales y el intercambio recíproco (Putnam, citado en Molyneux, 2002). Basta revisar la bibliografía reciente, que muestra la erosión de la vida social y el incremento del aislamiento social en contextos de muy escasos recursos (Moser, 1996; Auyero, 2000; González de la Rocha, 2000a, 2001).

Discutir el concepto de capital social en términos de su utilidad para el desarrollo y la instrumentación de programas de política social, y en particular de las acciones del Estado en materia de pobreza, exige incluir la dimensión de género, ausente en la mayor parte de los debates sobre el tema (Molyneux, 2002). No solamente las mujeres son la mayoría entre los pobres —superan a los hombres en varias de las expresiones de la pobreza: analfabetismo, falta de opciones laborales, empleos peor remunerados y menos seguros, y otras—, sino que muchos de los programas de alivio a la pobreza que se han puesto en marcha en América Latina (y otras regiones del mundo) durante los últimos años se basan, para su operación, en la activa participación de las mujeres (Molyneux, 2002). Como fue señalado en la sección anterior, el Programa Oportunidades no es una excepción. Este, como su antecesor Progresas, ha delegado en las mujeres la operación en el nivel familiar y comunitario y, con ello, depende de las actividades y responsabilidades femeninas en tanto son consideradas las guardianas del bienestar de la familia y administradoras de los ingresos domésticos. Este programa ha mantenido a las mujeres extremadamente ocupadas, puesto que además de cumplir con sus tareas como amas de casa y como trabajadoras asalariadas (en muchos casos), tienen que hacer frente a las corresponsabilidades que el programa les adjudica. Son ellas quienes tienen que ir a las pláticas de salud y llevar a los niños a las citas médicas, aun cuando estén sanos. Son ellas, también, quienes deben cumplir con las tareas colectivas y el trabajo

“voluntario” que como mujeres beneficiarias se ven obligadas a hacer en sus comunidades (López, 2000). Como plantean Batliwala y Bhanraj (2003) para el caso de los programas sociales basados en actividades femeninas en India, en estos programas se ha convertido a las mujeres en sus extensiones para garantizar su operación. Las reglas neoliberales para las mujeres son claras: cuidar y procurar el bienestar familiar y las condiciones económicas de los hogares, participar en actividades locales de desarrollo comunitario, ayudar a construir y mantener en operación a las instituciones locales, y destinar su energía política al trabajo productivo socialmente útil. No deja de sorprender el silencio que sobre el género se ha mantenido en las discusiones sobre capital social en la nueva agenda del desarrollo (Molyneux, 2002).

Como apunta Molyneux, no basta con reconocer el hecho de que las mujeres juegan un papel central en la generación del capital social que los gobiernos y las agencias internacionales quieren promover en sus programas de lucha contra la pobreza. Es necesario profundizar en el análisis de dicha participación porque, de hecho, las políticas sociales descansan, en buena medida, en un ejército de voluntarias que soportan una sobrecarga de trabajo (Schild, 2000, citada en Molyneux, 2002). Esta autora plantea que con demasiada frecuencia se asume que las mujeres están naturalmente predispuestas (y dispuestas) a servir a sus familias y a sus comunidades a través de su trabajo reproductivo y de mantenimiento de las redes sociales que dan lugar al capital social. Ello se traduce en que la responsabilidad de los proyectos comunitarios —y en general, los proyectos de política social— recaiga en manos femeninas (trabajo voluntario, corresponsabilidades, entre otros).

El acceso a las redes de relaciones sociales y a los intercambios que en ellas se producen, por otra parte, está moldeado por el género y las normas de parentesco (Pessar, 1999). Las redes, según han planteado autores como Portes y otros, son a la vez incluyentes y excluyentes, donde las diferencias de género juegan un papel importante. En los estudios sobre redes sociales de emigrantes mexicanos a los Estados Unidos se da cuenta de la construcción diferencial de redes masculinas y femeninas (Hondagneu-Sotelo, 1994; Pessar, 1999). En otras investigaciones se ha mostrado la existencia de redes distintas, que hombres y mujeres, miembros de los mismos hogares, construyen con fines y medios distintos (González de la Rocha, 1994).

Por último, no todas las relaciones sociales pueden manipularse o activarse con fines distintos a los que poseen en la estructura social, y el entorno social es particularmente restrictivo respecto de los usos y fines que las mujeres pueden dar a la movilización de sus relaciones sociales. En tanto que una mujer puede esperar que sus vecinas, hermanas o su marido

cooperen con ella mientras cuida a un hijo o un pariente enfermo, por ejemplo, estos lo harán con mucho mayor reticencia si esos favores permiten que ella gane más dinero, y especialmente si ese dinero no es destinado íntegramente al bienestar familiar. Si, en esta segunda situación, estos otros agentes sociales aceptan cooperar, lo harán en condiciones de reciprocidad mucho más estrictas, o a cambio de un beneficio tangible o de un contrato informal pero explícito.

D. Oportunidades y capital social

Ellos están comiendo carne, y yo estoy comiendo chiquigüites
(testimonio de una mujer no beneficiaria,
extraído de Adato, 2000)

Durston (2003), en su discusión sobre la necesaria vinculación entre el campo conceptual del capital social y el de la política social, plantea que el fomento del capital social de sectores excluidos puede desencadenar transiciones y potenciar reformas que reduzcan las inequidades sociales. Para este autor, hay tanto capital social individual como grupal y comunitario.¹⁶ El capital social individual se encuentra en las redes egocentradas, en donde el individuo accede a los recursos del capital social en su propia red de relaciones. El capital social grupal alude a los vínculos múltiples de los individuos que componen una red, lo que posibilita que las personas ahí involucradas puedan funcionar como un equipo. El capital social comunitario, por su parte, es aquel que llega a ser "plenamente colectivo". A diferencia de los dos anteriores, en este caso no hay "reclutamiento" o selección, sino que la membresía es un derecho de todos los integrantes de la comunidad. Este tipo de capital social depende fuertemente de la cooperación comunitaria, entendida como acción complementaria orientada al logro de objetivos compartidos de un emprendimiento común, y de las normas y sanciones derivadas del sistema sociocultural (Durston, 2003, p. 160). El concepto de capital social comunitario de Durston se puede confundir con la cultura de la comunidad, como parte del sistema sociocultural de las comunidades en tanto estructuras que contienen normas y sanciones. Además, es poco explícito respecto del conflicto y las desigualdades preexistentes (previas a programas) entre los miembros de una comunidad y mucho menos de los que pueden generarse con la operación de los programas sociales.

¹⁶ En total, plantea la existencia de seis tipos de capital. Además de los arriba señalados, postula la existencia de capital social de puente (alianzas horizontales a distancia geográfica), de escalera (intercambios asimétricos y vínculos entre los actores sociales y el Estado) y capital social societal. En especial este último es extremadamente difuso. Ninguno de estos tres han sido incluidos en nuestra reflexión.

Al igual que Adato (2000), Durston argumenta que el capital social es potencialmente "parte de la solución" para aliviar la pobreza y propiciar el desarrollo. Para él, el capital social de los pobres es un activo para la realización de proyectos personales, grupales y comunitarios. Adato, por su parte, plantea que las redes facilitan la acción colectiva para beneficio de todos los involucrados y, además, parte del supuesto de que tanto el fortalecimiento como el debilitamiento de las relaciones sociales tienen implicaciones en el cumplimiento de los objetivos de los programas específicos contra la pobreza. El papel del Estado, según esta perspectiva, es el de estimular la confianza donde esta no existe, con el propósito de promover la asociación y colaboración para fines comunes. Esta autora asume el "efecto-derrame" (*spill-over*) de los impactos positivos del Programa Oportunidades en toda la comunidad, que rebasa los límites de la inclusión directa en el programa. Es decir, sostiene que el grupo de familias no beneficiarias puede beneficiarse indirectamente del programa, por medio del incremento de recursos en las comunidades: mejorías en el suministro de recursos de salud y educación, donde se incluyen las "pláticas" sobre salud y nutrición, que tienen un fuerte componente educativo y de prevención, a las que supuestamente son invitadas.

Aunque en el Programa Oportunidades no se emprenden acciones directas para el fomento del capital social comunitario, el fortalecimiento del tejido social y comunitario forma parte de la filosofía que lo orienta, particularmente a partir de su refundación en 2002 (cuando pasa de Progresía a Oportunidades). Por otra parte, como apunta Adato (2000, p. 147), las acciones para aliviar la pobreza y las intervenciones para el desarrollo tienen efectos directos e indirectos, algunos intencionados y otros no. En esta sección nos abocamos a los impactos de naturaleza indirecta que el Programa Oportunidades ha operado en la creación y mantenimiento de vínculos y relaciones sociales. La información de que se dispone apunta en direcciones distintas. Por una parte, se ha observado el surgimiento del llamado por Durston (2003) "capital social grupal" entre las mujeres que forman parte del grupo de familias beneficiarias. Por otra, existen evidencias de conflicto y rupturas de lazos y relaciones sociales en el nivel de la comunidad, como respuesta a la división creada por el sistema de selección de familias beneficiarias. Se ha observado también la permanencia de relaciones de ayuda mutua e intenso intercambio social —preexistentes— a nivel comunitario, a pesar de la división entre familias beneficiarias y no beneficiarias. Por último, existen evidencias de situaciones de aislamiento social, no como resultado del programa sino como producto de la espiral de desventajas, que incluyen tanto la escasez de recursos económicos como la falta de reciprocidad y contacto social. El análisis que sigue se basa en esos cuatro tipos de situaciones, tomando en cuenta que es necesario distinguir entre la cooperación forzada y la solidaridad voluntaria (Molyneux, 2002),

así como entre las divisiones y conflictos sociales preexistentes a los programas y aquellos que surgen en el proceso de su operación.

1. Nuevas identidades: las mujeres “Progresas”¹⁷

El fortalecimiento de las relaciones sociales entre los individuos y familias que componen el grupo de los beneficiarios es uno de los efectos positivos del Programa Oportunidades. La evidencia de que se dispone permite hablar de un proceso de construcción de una nueva identidad social, las mujeres y familias Progresas, a partir de la selección de familias por parte del programa. Ser seleccionado como beneficiario va acompañado de todo un conjunto de actividades —individuales y colectivas— que incluyen los traslados a recoger los cheques, las pláticas de salud, y las faenas o equipos de trabajo voluntario o no para la realización de tareas de limpieza en la comunidad. Aunque las autoridades nacionales del programa no imponen estas tareas, ni estas forman parte de las operaciones del programa, las autoridades locales, los médicos y los maestros las exigen, y las mujeres beneficiarias se sienten obligadas a participar en ellas, muchas veces dirigidas por la promotora o por los encargados de salud y los maestros. En muchas comunidades, la promotora se encarga también de organizar los traslados de todas las mujeres beneficiarias de la comunidad a los lugares de recepción de las transferencias en efectivo, lo que implica pasar varias horas de un día, o hasta un día completo, en el grupo. Vivencias compartidas, actividades en común, asistencia a las pláticas educativas, aprendizajes mutuos para el mejor aprovechamiento de los recursos del programa y participación en trabajos colectivos, entre otras cosas, forman parte del ser “mujer/familia Progresas”. Los grupos focales realizados por Adato (2000, p. 42) proporcionaron información sobre “nuevos tipos de relaciones sociales que han fortalecido los efectos [del programa] en las mujeres beneficiarias y parecen estar creando nuevas formas de capital social entre ellas”. Según esta información, además de las actividades compartidas que tienen que ver directamente con el programa, las mujeres hablan de otros temas, comparten experiencias y problemas, se dan consejos, se pasan información relevante y, en general, aprovechan esos espacios para idear formas de solucionar sus problemas cotidianos. La autoidentificación como “mujer Progresas” esta acompañada de la identificación de otras mujeres y familias como no seleccionadas, y en ese sentido, distintas, y viceversa.

¹⁷ Vale la pena hacer notar que a pesar del cambio oficial -que data ya de varios años- del nombre del programa (de Progresas a Oportunidades), los habitantes de los pueblos y pequeñas ciudades estudiados siguen usando el primer nombre para referirse al programa, a los beneficios del mismo, a las corresponsabilidades que implica, y como un nuevo identificador social: “las mujeres Progresas, el grupo Progresas, ya me llegó el Progresas (el dinero de las becas), el trabajo del Progresas”, entre otros.

2. Rupturas y conflictos

En un estudio realizado en 1998, se afirmaba que el programa Progresá altera los sistemas igualitarios de redistribución relacionados con mecanismos de control social, característicos de comunidades rurales e indígenas. Ello conducía a la fragmentación social y a situaciones conflictivas entre individuos y familias, tanto en el interior de las comunidades, como entre promotoras y no beneficiarios (CIESAS, 1998). Pero ese mismo año, en nuestro trabajo de campo en El Mirador, Veracruz, observamos cómo, por el contrario, la selección externa de los beneficiarios debilitaba la división política interna que había impedido a los grupos políticos minoritarios acceder a programas sociales anteriores. Las familias incorporadas pertenecían a ambas facciones, lo que las había conducido a departir menos conflictivamente.¹⁸ En otra evaluación, realizada por Escobar y González de la Rocha durante el año 2001 (2002), se aportaron algunas evidencias de ruptura del tejido social de los barrios pobres en las pequeñas ciudades estudiadas. Aunque esta no fue una investigación específica sobre redes sociales, se recabó información sobre el uso de las relaciones sociales —entre parientes, amigos y vecinos— en la cotidianeidad de la vida de familias beneficiarias y no beneficiarias.¹⁹ Era difícil, sin embargo, atribuir esta situación al efecto del programa, lo que no le resta importancia al fenómeno. En contextos de ruptura del tejido social, de aislamiento y escasa participación en redes de relaciones, no podemos hablar de la existencia de capital social y mucho menos de su fortalecimiento.

Por su parte, Adato (2000) encontró que han surgido divisiones y conflictos entre las familias beneficiarias y las no beneficiarias como resultado de la diferencia construida por el programa. En este caso, es posible afirmar que el Progresá, lejos de fomentar el fortalecimiento del tejido social, lo ha deteriorado en algunos casos. Estas divisiones, en su opinión, representan los costos sociales de la focalización. Los informantes de Adato aluden a situaciones de injusticia (“no es justo que los del Progresá coman mejor y compren mejor ropa para sus hijos”), y la autora detectó —entre la población no beneficiaria— sentimientos de

¹⁸ En esta comunidad, la fracción perredista había sido excluida del acceso al PROCAMPO, un programa de subsidios en dinero a los productores rurales, mientras que una buena parte de ella accedió, junto con los priístas, al programa que entonces se llamaba PROGRESA.

¹⁹ Se trata de una investigación etnográfica que se basó en la recopilación de información sobre la vida cotidiana de los habitantes en las distintas localidades. Los datos fueron recopilados entre septiembre y octubre de 2002 en localidades semi urbanas de distintos estados del país (Arteaga, Michoacán, Basconcobe, Sonora, Ébano, San Luis, Potosí, Hostotipaquillo, Jalisco, La Ribera, y Tatahuicapan, Veracruz). Esas mismas localidades (y familias) fueron cubiertas en el estudio basal cuyo trabajo de campo data de octubre a diciembre de 2001. El estudio, entonces, fue un seguimiento al mismo universo, tanto respecto de las localidades como de las familias beneficiarias y no beneficiarias.

marginación, de no inclusión y no pertenencia al grupo que conforman las familias beneficiarias. Se han dado casos de ruptura de relaciones sociales cercanas preexistentes, como el observado en el estado de Veracruz: un par de comadres se dejaron de hablar porque una recibe los apoyos del Progresá y otra no (Adato, 2000, p. 170).

Esta idea se corrobora con datos recientes provenientes de la SEDESOL. La mayor parte de los individuos entrevistados en la encuesta "¿Qué dicen los pobres? Voces de los pobres" (SEDESOL, 2003b) opinan que los programas de combate a la pobreza crean desigualdades sociales (el 48,8% comparado con el 45,9% que están en desacuerdo; un 5,2% de los entrevistados no supieron o no contestaron). La pregunta sobre si estos programas crean conflictos en las comunidades fue respondida positivamente por el 46,5% y negativamente por el 46,6%.

Por otra parte, hay que tomar en cuenta que los programas de combate a la pobreza no llegan a operar en contextos sociales homogéneos y armónicos. Deben considerarse los conflictos y las divisiones preexistentes. La división entre beneficiarios y no beneficiarios se suma, entonces, a las diferencias sociales y las tensiones previas. Al respecto, en la información de Adato se observa que, en una comunidad del estado de Hidalgo, los problemas relacionados con Progresá se sumaron a las divisiones que ya existían.

La participación en actividades comunitarias es un tema relevante para la discusión del capital social en términos de las estructuras e instituciones sociales de cooperación del conjunto total de personas de una localidad (Durston, 2002). En la información que se ha recopilado en distintas evaluaciones del programa Progresá/Oportunidades (Adato, Escobar y González de la Rocha) se advierte que la creación de nuevas diferencias sociales en el nivel de la comunidad atenta contra la creación y el mantenimiento del capital social comunitario. Muchas mujeres no beneficiarias no quieren participar en las faenas o actividades realizadas con trabajo voluntario, normalmente encaminadas a la limpieza de la escuela, el centro de salud u otros espacios públicos, las que las mujeres beneficiarias se sienten obligadas a realizar, aunque no sean parte de las corresponsabilidades que el programa les pide. Se ha encontrado que algunos no beneficiarios siguen participando en este tipo de trabajo colectivo-comunitario, porque las promotoras o los médicos los convencen con el argumento de que toda la comunidad se verá favorecida con este tipo de actividades, o porque los no beneficiarios esperan que mediante dicha participación se los considere para incluirlos en el programa. Esto fue observado durante el trabajo de campo realizado tanto por Adato como por el equipo dirigido por Escobar y González de la Rocha. Como esa forma de inclusión no está prevista en el programa, se han generado sentimientos de

decepción que derivan en la no participación en las actividades grupales. Se ha observado una respuesta semejante respecto de las prácticas educativas para la salud y de las actividades comunitarias asociadas a las escuelas. Las mujeres no beneficiarias no asisten porque no se sienten bienvenidas, pues no pertenecen al grupo de las "mujeres Progresas".

Lo mismo ocurre con los aportes voluntarios para la sociedad de padres de familia de las escuelas, dinero que se destina a festivales escolares y otro tipo de actividades extracurriculares. En algunas comunidades, los no beneficiarios no están dispuestos a pagar las cuotas, bajo el argumento de no tener dinero, a diferencia de las familias beneficiarias. En otras, los maestros son particularmente duros en el cobro de las cuotas de las familias que saben que son beneficiarias.

En el estudio de Adato, hubo algunos reportes de conflictos directos entre beneficiarios y no beneficiarios. Dado que fueron pocos en comparación con otro tipo de manifestaciones, la autora piensa que las divisiones sociales que se han producido con la diferenciación entre beneficiarios y no beneficiarios no toman la forma de confrontaciones directas. La inexistencia de una confrontación directa, por otra parte, no quiere decir que no existan tensiones y problemas que se manifiestan de otras formas. Las principales expresiones de tensión social encontradas en el estudio de Adato son el resentimiento, la envidia y los chismes. Otras manifestaciones, más sutiles, tienen que ver con una preocupación de que la comunidad "no está bien", o con el deseo de que todos los habitantes de la comunidad formen parte del programa.

Tanto Adato como Escobar y González de la Rocha encontraron que la esperanza de ser incluido suaviza las tensiones. Ante las demandas de familias no beneficiarias que se sienten merecedoras (por sus condiciones de pobreza) de ser incluidas en el programa, las promotoras hacen las solicitudes de incorporación a nombre de estas familias, y la esperanza se mantiene durante el proceso. En decenas de miles de comunidades, la ampliación del programa a nuevas familias cada año mantuvo viva la esperanza de las no beneficiarias. Otro elemento que disminuye la tensión y los conflictos entre las familias es el conocimiento de que la inclusión de algunos y la exclusión de otros no se debió a procesos gestados localmente, ni a decisiones de miembros de la comunidad. Hemos encontrado que el ser incluido se atribuye muchas veces a la suerte e incluso, en ocasiones, a la voluntad divina.

3. Permanencia del intercambio social

Contamos con abundantes evidencias sobre la permanencia de las relaciones sociales y del intercambio social en las comunidades donde se ha realizado trabajo de campo como parte de las evaluaciones de impacto del

programa. Adato encontró unos pocos casos en que las relaciones sociales son buenas y existen formas de solidaridad a pesar de la diferencia construida entre familias beneficiarias y no beneficiarias. Los vínculos de parentesco son especialmente propicios para el mantenimiento de estas relaciones. Así, hermanas que son beneficiarias y no beneficiarias del programa comparten los apoyos o la información, se visitan, se ayudan mutuamente para cuidar a los niños, y tienen otras actitudes semejantes. Tanto en el estudio basal semi urbano de Escobar y González de la Rocha (2001) como en el seguimiento realizado un año después, se dio cuenta de la importancia que el intercambio social sigue teniendo para resolver los problemas cotidianos, la obtención de préstamos, el cuidado de los enfermos, entre otros. Para Adato, la permanencia de estas relaciones sociales entre beneficiarios y no beneficiarios se basa en el conocimiento de que la incorporación estuvo en manos de las autoridades.

Hemos encontrado que las familias beneficiarias cuentan con más recursos para actuar de manera solidaria e incluso generosa, especialmente con parientes cercanos (hermanas, madre). Sin duda, las transferencias que el programa hace a estas familias de manera regular (bimensualmente) ofrecen la posibilidad de hacer préstamos, obsequiar regalos, o pagar las deudas a tiempo.²⁰ En ese sentido, se ha planteado que el programa ha fortalecido la capacidad de las familias beneficiarias para entablar y mantener relaciones sociales. Igualmente, ha hecho posible que estas familias sostengan en condiciones "saludables" la economía de deuda que les caracteriza, ya que al pagar sus deudas a tiempo, mantienen la confianza que los tenderos (comerciantes que "dan fiado") tienen en las "mujeres Progresas".²¹ Por otra parte, estas transferencias han hecho posible que muchas familias beneficiarias se liberen de los tenderos que fían, pero abusan en los precios y, de esta manera, han ampliado sus opciones de relaciones y reducido sus gastos en mercancías básicas. Ello coadyuva al mantenimiento de este tipo de relaciones y sistemas de crédito informal, tan socorridos y necesitados por los pobres.

El tipo de bienes y servicios que fluyen por las redes de relaciones sociales, sin embargo, nada tienen que ver con las innovaciones económicas y empresariales de las que habla Portes. Más bien, se trata de bienes y servicios encaminados al presente inmediato, a los imponderables de la vida cotidiana. Es un capital social que se asemeja más a lo descrito por el término de "estrategias de sobrevivencia" que a espirales de acumulación. Pero aun estos intercambios, con todo y su precariedad, están sujetos a las

²⁰ Además de posibilitar un margen mayor de ingresos para dedicar a la alimentación y a la compra de ropa para los hijos, especialmente calzado y uniformes escolares.

²¹ Los prestamistas y tenderos conocen incluso las fechas de recepción de los apoyos, de tal manera que tienen más certeza de que los créditos serán saldados.

obligaciones de la reciprocidad (obligación de dar, de recibir y de reciprocitar), a normas y a sanciones. El incumplimiento de la reciprocidad conduce, como se ha planteado, a la ruptura de las relaciones y al gradual o súbito proceso de aislamiento social.

4. Aislamiento social

A la pregunta de la SEDESOL: "¿quién le ayudaría si se quedara sin trabajo?", un número sorprendentemente alto (19,7%) responde que nadie. Un también elevado porcentaje —12,3%— opina que nadie le ayudaría si no tuviera que comer, y un 13% cree que nadie le ayudaría si no tuviera donde vivir. Más del 50% de los entrevistados no cuentan con alguien que le cuide a su hijo menor de 8 años cuando es menester salir de casa, y un porcentaje extremadamente bajo: 4,79% preferiría colaborar con vecinos para resolver su problema de pobreza. Por otra parte, la gran mayoría piensa que a la gente solo le interesa su propio bienestar (73,6%) (SEDESOL, 2003b). Estos datos hablan de la situación de aislamiento social en que viven muchos individuos y familias en México. En los estudios realizados por Escobar y González de la Rocha, tanto en el estudio basal como en el seguimiento de impacto del Programa Oportunidades, se ofrecieron evidencias de aislamiento social en los barrios pobres de las pequeñas ciudades estudiadas. Esta situación, sin embargo, no puede ser atribuida a algún efecto perverso del programa, sino a la muy precaria situación económica de estas familias. En dichos estudios se ha mostrado que las estructuras de oportunidades de las localidades son extremadamente limitadas y precarias. Tanto hombres como mujeres encuentran muy escasas opciones de empleo, y este es muy mal remunerado, o la producción agrícola es poco eficiente y ofrece muy escasos ingresos. En esos contextos, las personas son poco capaces de mantener las relaciones sociales, porque su capacidad de reciprocitar es extremadamente limitada. A lo largo de muchas entrevistas, tanto en pequeños pueblos rurales como en grandes ciudades, ha aparecido el elemento de la falta de recursos materiales como obstáculo para frecuentar amistades, aceptar invitaciones, o simplemente visitar a un pariente. La reciprocidad tiene costos que los más pobres no pueden afrontar (González de la Rocha, 1999, 2000a). Las familias que experimentan este tipo de situaciones tienen pocas oportunidades de hacer uso de sus relaciones sociales. Como hemos visto, el capital social florece cuando las condiciones materiales lo permiten; cuando las condiciones materiales son adversas, el capital social no solo no florece sino que se extingue.

E. Conclusiones

Las discusiones en torno del capital social han sido útiles en muchos sentidos. En primer lugar, en un mundo académico tan sesgado hacia enfoques y conceptos de la economía (Fine, 2001), la reflexión sobre lo social ha sido no solo refrescante sino útil para dar cuenta de un conjunto importante de elementos que forman parte de los procesos y dinámicas que conforman a las sociedades.²² En el campo de la política pública, la dimensión resucitada de lo social ha abierto la posibilidad de discutir y ventilar fenómenos que habían permanecido silenciosos en las esferas de poder. No es irrelevante el hecho de que los funcionarios del gobierno federal hablen de la desigualdad social y las inequidades en el acceso a los recursos y oportunidades como la causa fundamental, primera y última, de la pobreza. Tampoco es trivial que lo social, las acciones y prácticas de la gente, sean considerados como “parte de la solución” a los problemas que aquejan a nuestras sociedades. Moser (1996) planteaba hace tiempo que la importancia de los estudios sobre las respuestas sociales al cambio económico (llamadas entonces “estrategias de sobrevivencia”) radicaba en la necesidad de que las políticas públicas sean instrumentadas para potenciar las acciones de la gente, y no para obstaculizarlas. Las respuestas sociales y familiares al cambio económico han incluido el uso de las relaciones sociales y la intensificación del intercambio social como uno de los pocos recursos —además de su fuerza de trabajo— que podían controlar (González de la Rocha, 1994).

Pero como se ha mostrado en los estudios sobre los impactos sociales de las crisis económicas, la intensificación del uso de los recursos familiares ha tenido enormes costos sociales. Todos los miembros de los grupos domésticos se ven forzados a trabajar más por menos ingresos, pero las mujeres han pagado el costo más alto de los cambios. Sus jornadas de trabajo se han intensificado al tener que participar en mercados de trabajo que las discriminan y excluyen. Sus cargas de trabajo doméstico se han duplicado ante la necesidad de sustituir bienes y servicios adquiridos en el mercado, por bienes y servicios producidos en casa. Son ellas, en gran medida, las que llevan a cabo el trabajo de mantener aceitada y en buen estado la maquinaria social que les brinda apoyos solidarios y favores recíprocos, en el marco de la cotidianidad de las carencias domésticas; y son las mujeres las primeras en experimentar los amargos sabores del aislamiento social cuando no han cumplido con la obligación de reciprocitar y dejan de contar con los apoyos de las redes desmanteladas de la extrema pobreza (Benería, 1992; González de la

²² Aunque en sí mismo el término de capital social refleja, según Fine (2001), la conquista conceptual que la economía ha ejercido en las ciencias sociales.

Rocha, 1994; Chant, 1991, 1997). Como afirma Molyneux (2002), estas respuestas pueden ser interpretadas como evidencias de la importancia del capital social, sin las cuales América Latina hubiera experimentado una crisis de reproducción social. Sin embargo, el capital social no es una panacea que pueda solucionar todos los problemas de escasez, o sustituir los recursos económicos y las políticas responsables (empleos, ingresos adecuados, condiciones de producción adecuadas). De hecho, la vida social, rica en contactos y relaciones, aparece cuando hay recursos materiales que abonan y nutren la sociabilidad (Putnam, 1993), y la erosión del capital social se relaciona claramente con el empeoramiento de las condiciones materiales de vida (Moser, 1996; Wilson, 1990, 1997; González de la Rocha, 1999, 2000a, 2001).

En las discusiones acerca del capital social no se consideran de manera suficiente los costos del intercambio social. Se hace referencia a las normas y obligaciones relacionadas con la pertenencia de grupos o redes de relaciones, pero los costos económicos de la reciprocidad quedan excluidos de la reflexión. El cumplimiento de las obligaciones, por otra parte, tampoco se ha cuestionado, y simplemente se aclara que quien no cumple es socialmente sancionado. En contextos de pobreza, agudizados por las crisis económicas que han tenido lugar de manera recurrente en América Latina, reciprocitar se vuelve una obligación de difícil cumplimiento. Resulta sorprendente constatar que la mayor parte de las ideas en torno de la reciprocidad, la solidaridad y la ayuda mutua asumen la existencia ilimitada de estos elementos, como si fueran recursos inagotables. Por el contrario, los recursos y las relaciones sociales son contruidos, finitos y limitados. Las ideas acerca de la reciprocidad, la solidaridad y la ayuda mutua, como partes de la solución a la pobreza, y las estrategias que los pobres implementan ante el cambio económico de manera ilimitada permanecen en los textos especializados sobre el tema, incluidos aquí los de la perspectiva del capital social. Se plantea de manera recurrente que la participación en las redes sociales es la solución a un amplio número de problemas que los pobres enfrentan cotidianamente. Las redes sociales aparecen, entonces, como "un refugio contra la desocupación" (Chiarello, 1994), "un seguro de desempleo a la latinoamericana" (Lomnitz, 1975), como "intercambios que compensan los aumentos de los costos de la economía" (Gershuny, 1994), o como "parte de la solución" (Durstun, 2003). El intercambio social, desde estas perspectivas, amortigua, compensa y de cierta forma soluciona las necesidades y los problemas de escasez de recursos en contextos donde las estructuras de oportunidades han mermado las opciones para la obtención de ingresos por medio del uso de la fuerza de trabajo. Pero, ¿cómo acceder a un favor —visto como ayuda mutua o capital social— si no se tienen los recursos para reciprocitar?

Las crisis económicas recurrentes y el desgaste que estas han producido en las formas de sobrevivencia de los pobres han causado estragos en el consumo de bienes y servicios, como también en la capacidad de formar parte de redes de relaciones sociales y, por lo tanto, de hacer uso de los recursos que fluyen en dichas redes. En ese sentido, podemos afirmar que la pobreza extrema, la carencia acumulada en el tiempo, erosiona las bases del capital social. Esta afirmación debe enmarcarse en una discusión más amplia, que tome en cuenta no únicamente los recursos sociales o la participación de los individuos en redes de relaciones, sino los cambios que los grupos domésticos y familiares han sufrido a lo largo de los últimos años en varias dimensiones de sus vidas. La familia, vista como la instancia donde "se resuelven" los problemas de escasez, ha experimentado procesos de cambio en su organización y en su posibilidad de responder con sus tradicionales "estrategias de sobrevivencia". La idea de que los pobres "se las arreglan" mediante la instrumentación de mecanismos sociales para sobrevivir, pase lo que pase, encuentra obstáculos para su aplicación en contextos y momentos históricos caracterizados por muy precarias oportunidades laborales y por la exclusión laboral (González de la Rocha, 2001).

La estabilidad económica (laboral y familiar), los ingresos relativamente seguros y la estabilidad física (contraria a la movilidad geográfica) son elementos que respaldan la pertenencia a redes sociales de ayuda mutua donde puede florecer el intercambio social. Lo contrario: inestabilidad laboral, ingresos eventuales y precarios, y movilidad o escasa permanencia en la localidad, se traducen en la gradual discriminación de ciertos grupos domésticos por parte de quienes integran las redes sociales (Mingione, 1994; González de la Rocha, 1997, 2000a). El intercambio social es frágil y vulnerable a la pobreza de recursos económicos, y la aplicabilidad del concepto capital social, en estos contextos, se desvanece.

El Programa Oportunidades, según los estudios de impacto que aquí se revisaron, ha tenido efectos en varios sentidos. Además de los impactos que ha producido en las áreas de alimentación, salud y educación y vivienda —que no fueron motivo de este artículo—, con el programa se ha logrado la constitución de grupos informales de mujeres alrededor de las tareas directamente ligadas a él, donde hay muestras de solidaridad y colaboración.²³ Aunque no podemos asegurar que las relaciones sociales que componen estos grupos no existían anteriormente, el hecho de que ellos giren alrededor de las responsabilidades de la titularidad del programa nos hace pensar, con cierto grado de confianza, que su gestación o consolidación se relaciona con la operación del Programa Oportunidades. Podemos suponer que a medida que se produzcan mejoras en otros indicadores del bienestar/vulnerabilidad (trabajo, capital humano, vivienda), la capacidad de

²³ Para un análisis de estos cambios, véase Escobar y González de la Rocha, 2002 y 2003.

entablar y mantener relaciones sociales se verá incrementada. Sin embargo, si las diferencias en los niveles de bienestar entre las familias beneficiarias y no beneficiarias aumentan, podemos inferir que habrá un mayor distanciamiento y posiblemente un mayor conflicto entre ellas.

Bibliografía

- Abel, Christopher y Lewis, Colin M. (2002), "Exclusion and engagement: a diagnosis of social policy in Latin America in the long run", *Exclusion & Engagement. Social Policy in Latin America*, Christopher Abel y Colin M. Lewis (eds.), Londres, Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Londres.
- Adato, Michelle (2000), "El impacto de Progresía sobre las relaciones sociales en la comunidad", *PROGRESIA/Más oportunidades para las familias pobres. Evaluación de resultados del Programa de Educación, Salud y Alimentación*, México, D.F.
- Anaya, Juan Manuel (s/f), "Migración, formas de gobierno y usos y costumbres en Santa María Asunción, Oaxaca", México, D.F., inédito.
- Atria, Raúl y Marcelo Siles (comps.) (2003), "Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma", *Libros de la CEPAL*, N° 71 (LC/G.2194-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), noviembre. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.03.II.G.03.
- Auyero, Javier (2000) "The hyper-shantytown: neo-liberal violence(s) in the Argentine slum", *Ethnography*, vol. 1, N° 1.
- Banco Mundial (2001), *Informe sobre el desarrollo mundial 2000-2001: lucha contra la pobreza*, Washington, D.C.
- Batliwala, Srilatha y Deepa Dhanraj (2003), "Where gender meets patriarchy, fundamentalism and neo-liberal economics. A report on gender myths and feminist fables from the Indian frontline", documento presentado en el seminario Gender Myths and Feminist Fables: Repositioning Gender in Development Policy and Practice, Instituto de Estudios para el Desarrollo, Universidad de Sussex, 2-4 de julio.
- Bazán, Lucía (1999), *Cuando una puerta se cierra cientos se abren. Casa y familia: los recursos de los desempleados de la refinería 18 de marzo*, México, D.F., Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
- (1998), "El último recurso: las relaciones familiares como alternativas frente a la crisis", documento presentado en el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), Chicago.
- Benería, Lourdes (1992), "The Mexican debt crisis: restructuring the economy and the household", *Unequal Burden. Economic Crises, Persistent Poverty, and Women's Work*, Lourdes Benería y Shelley Feldman (eds.), Boulder, Westview Press.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (1995), *Modelos de desarrollo, papel del Estado y políticas sociales: nuevas tendencias en América Latina* (LC/R.1575), Santiago de Chile.
- CIESAS (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en Occidente) (1998), *Acercamiento etnográfico y cultural sobre el impacto del programa Progresía en doce comunidades de seis estados de la República*, México, D.F.

- Chant, Sylvia (1997), *Woman-headed Households. Diversity and Dynamics in the Developing World*, Basingstoke, Macmillan.
- ___(1991), *Women and Survival in Mexican Cities*, Manchester, Manchester University Press.
- Chávez Galindo, Ana María (comp.) (1994), *El combate a la pobreza en Morelos. Aciertos y desaciertos de solidaridad*, Cuernavaca, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Universidad Nacional Autónoma de México (CRIM-UNAM).
- Chiarello, Franco (1994), "Economía informal, familia y redes sociales", *Solidaridad y producción informal de recursos*, René Millán (comp.), México, D.F., Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- Comité Técnico de la Pobreza (2002), "Medición de la pobreza: variantes metodológicas y estimación preliminar", documentos de investigación, N° 1, México, D.F., Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
- Cordera Campos, Rolando y Enrique González Tiburcio (1991), "Crisis and transition in the Mexican economy", *Social Responses to Mexico's Economic Crisis of the 1980s*, Mercedes González de la Rocha y Agustín Escobar Latapí (eds.), La Jolla, San Diego, Centro de Estudios México-Estados Unidos, Universidad de California.
- Cortés, Fernando y otros (2002), "Evolución y características de la pobreza en México en la última década del siglo XX", documentos de investigación, N° 2, México, D.F., Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
- Cortés, Fernando y Rosa María Rubalcava (1991), *Autoexplotación forzada y equidad por empobrecimiento*, México D.F., El Colegio de México.
- Durston, John (2003), "Capital social: parte del problema, parte de la solución, su papel en la persistencia y en la superación de la pobreza en América Latina y el Caribe", *Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma*, *Libros de la CEPAL*, N° 71 (LC/G.2194-P), Raúl Atria y Marcelo Siles (comps.), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), noviembre. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.03.II.G.03.
- ___(2002), "El capital social campesino en la gestión del desarrollo rural. Días, equipos, puentes y escaleras", *Libros de la CEPAL*, N° 69 (LC/G.2185-P/E), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), noviembre. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.02.II.G.72.
- Dresser, Denise (1991), *Neopopulist Solutions to Neoliberal Problems*, La Jolla, San Diego, Centro de Estudios México-Estados Unidos, Universidad de California.
- Escobar, Agustín (2003a), "Antropología y política social", *Ichan Tecolotl*, año 13, N° 1555, México, D.F., Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en Occidente (CIESAS).
- ___(2003b), "Poverty, social capital and international migration", México, D.F., Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en Occidente (CIESAS).
- ___(2002a), "PROGRESA y los nuevos paradigmas de la acción social del Estado en México", *El futuro del Estado social*, Jorge Alonso, Luis Armando Aguilar y Richard Land (coords.), Guadalajara, Universidad de Guadalajara/Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)/Goethe Institut-Guadalajara.

- (2002b), "The PROGRESA programme and social change in rural México", *Social Policy Reform and Market Governance in Latin America*, Luise Haagh y Camila Helgo (eds.), Londres, Palgrave Macmillan.
- (1999), "The Progresas programme and social change in rural Mexico", documento presentado en la conferencia anual de la Society for Latin American Studies (SLAS), Cambridge, abril.
- Escobar, Agustín y Mercedes González de la Rocha (2003), "Evaluación cualitativa del programa de desarrollo humano oportunidades", documentos de investigación, N° 3, Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
- (2002), *Documento final de diagnóstico cualitativo de hogares semi-urbanos*, México, D.F., Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en Occidente (CIESAS).
- (2000), *Evaluación cualitativa del Progresas en localidades rurales*, México, D.F., Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en Occidente (CIESAS).
- Estrada, Margarita (1999), 1995. *Familias en la crisis*, México, D.F., Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en Occidente (CIESAS).
- Fafchamps, M. y B. Minten (1998), "Returns to social capital among traders", *IFPRI-MSSD Discusión Paper*, No. 23, Washington, D.C.
- Feijóo, María del Carmen (2001), *Nuevo país, nueva pobreza*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica (FCE).
- Filgueira, Carlos (2002), "Estructura de oportunidades, activos de los hogares y movilización de activos en Montevideo (1991-1998)", *Trabajo y ciudadanía. Los cambiantes rostros de la integración y exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de América Latina*, Ruben Kaztman y Guillermo Wormald (coord.), Montevideo, Cebra Comunicación Visual.
- Fine, Ben (2001), *Social Capital versus Social Theory: Political Economy and Social Science at the Turn of the Millennium*, Londres, Routledge.
- Gershuny, Jonathan (1994), "La economía informal: su papel en la sociedad postindustrial", *Solidaridad y producción informal de recursos*, René Millán (comp.), México, D.F., Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- González de la Rocha, Mercedes (2001), "From the resources of poverty to the poverty of resources? The erosion of a survival model", *Latin American Perspectives*, vol. 28, N° 4.
- (2000a), *Private Adjustments: Household Responses to the Erosion of Work*, Nueva York, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
- (2000b), "Lo vigente y lo emergente: tendencias recientes en la política social en México", *PROGRESA/Más oportunidades para las familias pobres. Evaluación de resultados del Programa de Educación, Salud y Alimentación*, México, D.F.
- (1999), "La reciprocidad amenazada: un costo más de la pobreza urbana", *Revista latinoamericana de estudios del trabajo*, enero.
- (1997), "Where we are? Current patterns and emerging trends in Mexican social policy", *Enfoque, otoño*, La Jolla, San Diego, Centro de Estudios México-Estados Unidos, Universidad de California.
- (1994), *The Resources of Poverty: Women and Survival in a Mexican City*, Oxford, Basil Blackwell.

- (1991), "Family well-being, food consumption, and survival strategies during Mexico's economic crisis", *Social Responses to Mexico's Economic Crisis of the 1980s*, Mercedes González de la Rocha y Agustín Escobar Latapí (eds.), La Jolla, San Diego, Centro de Estudios México-Estados Unidos, Universidad de California.
- (1988), "Economic crisis, domestic reorganisation and women's work in Guadalajara, México", *Bulletin of Latin American Research*, vol. 7, N° 2.
- (1986), *Los recursos de la pobreza. Familias de escasos recursos de Guadalajara*, Guadalajara, El Colegio de Jalisco/CIESAS/SPP.
- González de la Rocha, Mercedes y Agustín Escobar (1986), "Crisis y adaptación: hogares de Guadalajara", documento presentado en la tercera Reunión nacional de la Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE), México, D.F.
- González de la Rocha, Mercedes y otros (2002), *Documento final de hogares. Evaluación cualitativa de impacto. Seguimiento diacrónico 2001-2002*, México, D.F., Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en Occidente (CIESAS).
- Granovetter, Mark S. (2002), "The strength of weak ties", *Social Networks, Critical Concepts in Sociology*, John Scott (ed.), Londres, Routledge.
- Hardy, Clarisa (2003), "Una nueva generación de reformas sociales en América Latina", *La cuestión social: superación de la pobreza y política social a 7 años de Copenhague*, Rolando Cordera, Leonardo Lomelí y Rosa Elena Montes de Oca (coords.), México, D.F., Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)/Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD)/Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).
- Hondagneu-Sotelo, Pierrette (1994), *Gender Transitions. Mexican Experiences of Immigration*, California, University of California Press.
- (1992), "Overcoming patriarchal constraints: the reconstruction of gender relations among Mexican immigrant women and men", *Gender and Society*, vol. 6, N° 3.
- Katzman, Rubén (2002), "Convergencias y divergencias, exploración sobre los efectos de las nuevas modalidades de crecimiento sobre la estructura social de cuatro áreas metropolitanas", *Trabajo y ciudadanía. Los cambiantes rostros de la integración y exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de América Latina*, Rubén Katzman y Guillermo Wormald (coord.), Montevideo, Cebrá Comunicación Visual.
- (coord.) (1999), *Activos y estructuras de oportunidades. Estudios sobre las raíces de la vulnerabilidad social en Uruguay (LC/MVD/R.180/E)*, Montevideo, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Lin, Nan (2001), "Building a network theory of social capital", *Social Capital. Theory and Research*, Nan Lin, Karen Cook y Ronald S. Burt (eds.), Nueva York, Aldine de Gruyter.
- Lomnitz, Larissa (1975), *¿Cómo sobreviven los marginados?*, México, D.F., Siglo XXI Editores.
- López, Isabel (2000), "Familia y género en Progresas", *PROGRESA/Más oportunidades para las familias pobres. Evaluación de resultados del Programa de Educación, Salud y Alimentación*, México, D.F.
- Mauss, Marcel (1966), *The Gift*, Londres, Cohen & West Ltd.

- Mingione, Enzo (1994), "Sector informal y estrategias de sobrevivencia: hipótesis para el desarrollo de un campo de indagación", *Solidaridad y producción informal de recursos*, René Millán (comp.), México, D.F., Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- Molinar, Juan y Jeffrey Weldon (1994), "Programa Nacional de Solidaridad: determinantes partidistas y consecuencias electorales", *Estudios sociológicos*, vol. 12, N° 34.
- Molyneux, Maxine (2002), "Gender and the silences of social capital: lessons from Latin America", *Development and Change*, vol. 33, N° 2.
- Moser, Caroline (1996), "Confronting crisis. A comparative study of household responses to poverty and vulnerability in four urban communities, environmentally sustainable development studies", *Monographs Series*, N° 8, Washington, D.C., Banco Mundial.
- Perry, G.M. y Lindon Robinson (2001), "Evaluating the influence of personal relationships on land sale prices: a case study in Oregon", *Land Economics*, vol. 77, N° 3.
- Pessar, Patricia (1999), "The role of gender, households, and social networks in the migration process: a review and appraisal", *The Handbook of International Migration: The American Experience*, Charles Hirschmann, Philip Kasinitz y Josh DeWind (eds.), Nueva York, Russell Sage Foundation.
- Polanyi, Karl (1968), *The Great Transformation*, Boston, Beacon Press.
- Portes, Alejandro (1998), "Social capital: its origins and applications in modern sociology", *Annual Reviews of Sociology*, vol. 24.
- (1995), "Economic sociology and the sociology of immigration: a conceptual overview", *The Economic Sociology of Immigration. Essays on Networks, Ethnicity and Entrepreneurship*, Alejandro Portes (ed.), Nueva York, Russell Sage Foundation.
- Portes, Alejandro y Patricia Landolt (2000), "Social capital: promise and pitfalls of its role in development", *Journal of Latin American Studies*, vol. 32.
- Radcliffe-Brown, A.R. (1940), "On social structure", *Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, vol. 70.
- Roberts, Bryan (2002), "Citizenship, social policy and population change", *Exclusion & Engagement. Social Policy in Latin America*, Christopher Abel y Colin M. Lewis (eds.), Londres, Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Londres.
- Roberts, Bryan y Agustín Escobar (1997), "Mexican social and economic policy and emigration", *At the Crossroad Mexico and U.S. Immigration Policy*, F. Bean y otros (eds.), Lenham, MD, Rowman and Littlefield Publishers.
- Robison, Lindon, Marcelo Siles y Allan Schmid (2003), "El capital social y la reducción de la pobreza: hacia un paradigma maduro", *Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma*, *Libros de la CEPAL*, N° 71 (LC/G.2194-P), Raúl Atria y Marcelo Siles (comps.), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), noviembre. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.03.II.G.03.
- SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social) (2003a), *Medición del desarrollo, México 2000-2002*, México, D.F.

- _____(2003b), *¿Qué dicen los pobres? Voces de los pobres*, Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación, agosto.
- Székely, Miguel (2002), "Hacia una nueva generación de política social", *Cuadernos de desarrollo humano*, N° 2, México, D.F., Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
- Tello, Carlos (1991), "Combating poverty in México", *Social Responses to Mexico's Economic Crisis of the 1980s*, Mercedes González de la Rocha y Agustín Escobar Latapí (eds.), La Jolla, San Diego, Centro de Estudios México-Estados Unidos, Universidad de California.
- Vázquez Mota, Josefina (2002), "Brechas de desigualdad: principal desafío de la política social de México", *Cuadernos de desarrollo humano*, N° 1, México, D.F., Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
- Wilson, William Julius (1997), *When Work Disappears*, Nueva York, Vintage Books.
- _____(1990), *The Truly Disadvantaged*, Chicago, The University of Chicago Press.
- Wolf, E.R. (1966), *Peasants*, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, Prentice Hall.

